



20 / Entrevista

Emilio Vega
Ex juez decano de Valladolid
y ex titular del Juzgado
de Violencia contra la Mujer



16 / Un día en

**Un día en el Archivo
General de Simancas**



ABOGACÍA DE VALLADOLID

Revista semestral del Ilre. Colegio de la Abogacía de Valladolid / 1.^{er} SEMESTRE 2024

Equilibristas
en la **concertina**



ABOGACÍA DE VALLADOLID

COMISIÓN DE REVISTA

Alonso Pérez, Laura
Álvarez Álvarez, Araceli —responsable—
Aparicio Gutiérrez, Marta
Berdugo Manzano, Antonio
Castro Manzanares, Carmen
Escalera Alonso, Carlos
Gallego Velloso, Cristina
Marcos Ramos, Irene
Ruanova Aranz, Ana María
Vielba Serrano, Mónica

COLABORAN

Díez Segoviano, José María
Domínguez Luelmo, Andrés
Escalada López, M^a Luisa
Herrero Batalla, Fernando
Martín Maestro, Miguel Ángel
Miravalles Calleja, Celia
Prada López, Segundo
Toribios Fuentes, Fernando

EDITA

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALLADOLID
C/ Torrecilla, 1. 47003 Valladolid
Tel.: 983 010 900
E-mail: comisionrevista@icava.org
www.icava.org

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Isabel Arenales,
Rasgo Audaz, Sdad. Coop.

ASESORÍA DE REDACCIÓN

Valor Creativo Comunicación
Burgos, Piluca
Campillo, Elisa
Osorio, Grecia

DEPÓSITO LEGAL

VA 48-2012

Las opiniones vertidas por nuestros redactores y colaboradores en estas páginas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la línea editorial de *Abogados de Valladolid* ni el criterio del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.

3

EDITORIAL

4

CARTA DEL DECANO

5

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS

Por Araceli Álvarez

11

DERECHO OBJETIVO. El derecho de retracto en fincas rústicas, por Celia Miravalles

12

ACTUALIDAD. El complemento de paternidad, por Antonio Berdugo

14

EN EL CAFETÍN CON... Yolanda Gutiérrez, por Elisa Campillo

16

UN DIA EN... El Archivo de Simancas, por Grecia Osorio

19

IMPROBABLES JUECES. Le Juge Fayard dit 'le Shériff', por Miguel Ángel Martín Maestro

20

ENTREVISTA. Emilio Vega, por Elisa Campillo

22

EN SALA. La responsabilidad de la Administración por los daños causados por las vacunas, por Carmen Castro Manzanares

24

OPINIÓN. Prohibido orientar sobre honorarios, por José María Díez Segoviano

26

COMISIONES

27

EL COLEGIO EN LA PRENSA

28

ANÁLISIS. Independencia de los jueces e independencia del Judicial en la Unión Europea, por M^a Luisa Escalada López

29

JURIDÍCAMENTE INCORRECTO

Por Segundo Prada Velasco

30

PUBLIREPORTAJE CASTILLA Y LEÓN. Castilla y León: la naturaleza como patrimonio

32

REPORTAJE. Equilibristas en la concertina, por Piluca Burgos

34

SAPIENTIA AEDIFICAVIT. El denominado "día de gracia" y su aplicación a los plazos sustantivos, por Fernando Toribios Fuentes y Andrés Domínguez Luelmo

37

SAPERE AUDE. María Telo, por Carmen Castro Manzanares

38

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. Federico, el abogado que nunca ejerció; por Irene Marcos

39

DERECHO Y CULTURA. Incongruencias, por Fernando Herrero

40

ESCAPADAS. Copenhague, la bella capital danesa, por Mónica Vielba Serrano

42

VIDA COLEGIAL. Por Araceli Álvarez Álvarez



EDITORIAL

UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Decía hace veintiún siglos el célebre filósofo, político, orador y escritor romano Séneca, según se le atribuye la cita: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Aún lo decimos, y con conocimiento de causa. El retraso en el funcionamiento de la Administración de justicia que venimos experimentando todos desde hace mucho, parece haberse recrudecido en los últimos tiempos. Quizás porque estamos aún padeciendo las consecuencias de las sucesivas huelgas de letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios judiciales, quizás porque no es posible hacer frente a la carga real de trabajo con los medios que cuenta la Administración de Justicia, lo cierto es que cada vez toma más tiempo conseguir una respuesta de los jueces y tribunales, y se asume con resignación como si fuera algo inevitable frente a lo que nada puede hacerse. Nuestra Carta Magna atribuye la potestad, emanada del pueblo, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a los jueces y tribunales, siendo esta una función esencial: generar confianza entre los ciudadanos, para contribuir a la paz social y, así, fortalecer nuestra democracia. Para ello es fundamental que la justicia sea eficiente, que dé una respuesta a tiempo, para que no pierda su razón de ser y mantenga el respeto que hacia ella deben tener los ciudadanos. Además de

ser la salvaguarda del Estado democrático y de derecho, la justicia es esencialmente un servicio público que requiere de una organización que garantice la correcta identificación de responsabilidades y la rendición de cuentas. De no conseguir esos fines, corremos el peligro de que los ciudadanos empecemos a buscar soluciones al margen de esta bajo la creencia de que la justicia no está a nuestro servicio, con todo lo negativo que ello acarrea. No debemos olvidar que el papel de los jueces en una democracia como la nuestra, cuya

Es fundamental que la justicia sea eficiente, que dé una respuesta a tiempo, para que no pierda su razón de ser

El contrato social nace para crear la justicia como institución que garantiza la vida, la igualdad, la libertad y la propiedad

debilidad está empezando a atisbarse, es fundamental para preservarla; cada uno desde su tribunal, unipersonal o colegiado, dando la respuesta rápida y eficiente que los ciudadanos esperan de ellos. La importancia de su función la encontramos en los planteamientos de Hobbes y Locke sobre el contrato social que, según el primero, nace para crear la justicia como institución, en la que un juez dirime las controversias propias de la ley natural del ser humano, y que garantiza lo que para Locke son sus derechos básicos: la vida, la igualdad, la libertad y la propiedad. El contrato social se justifica por la necesidad de que sacrifiquemos la violencia primitiva que nos permite defender la propia existencia, para que sea la sociedad civil, a través del juez común, el que lo haga por nosotros. Si los ciudadanos empiezan a sentir que no disponen de una autoridad eficiente a la que apelar para solventar las diferencias que surjan entre ellos, volveremos irremediablemente y poco a poco al estado de naturaleza, o lo que es peor, al gobierno absoluto. La abogacía, como una pieza esencial del engranaje que mueve a la administración de justicia, debe colaborar para fortalecer esa función de los jueces, recordándoles que deben ejercer de la mejor manera posible el gran poder que tienen, y la gran responsabilidad que este conlleva. ■



JAVIER MARTÍN, JULIO DE 2024

Carta del Decano



No puedo empezar esta carta sin dedicar un cariñoso agradecimiento a Begoña, quien ha regentado el Cafetín del Colegio, condicionada primero por la estela del inolvidable Toño; después, por la irrupción en las relaciones sociales de una impredecible pandemia; y, por último, por las consecutivas huelgas en la Administración de Justicia. A pesar de todo, y superando la adversidad, ha sabido aportarnos el refrigerio necesario en tan terapéutico espacio colegial. Ojalá disfrute en su jubilación lo que las circunstancias le hurtaron.

Y cómo no, junto a la despedida de Begoña resulta obligado dar la bienvenida a un entusiasmado Álvaro, quien en tan corto espacio de tiempo ya ha demostrado sus habilidades profesionales y sociales.

El Cafetín simboliza para quienes integramos el colectivo de la abogacía vallisoletana un estandarte de envidiable diversidad. Un punto de encuentro básico en la vida colegial, que es capaz de diluir —incluso resolver— muchas de nuestras preocupaciones.

Más allá de esa diversidad, asisto con cierta preocupación a un panorama sobre el que, al margen de las cuestiones de fondo, creo que deberíamos meditar toda la abogacía vallisoletana. Ya en anteriores cartas y en múltiples actos institucionales he expresado con enorme orgullo que el principal valor de este Colegio es su capital humano. Y es que, aun rodeados de un tenso clima social y una preocupante polarización política, la abogacía de Valladolid ha sido capaz de dar un ejemplo de civismo, educación y respeto en cada una de las juntas y asambleas colegiales. Incluso durante actos reivindicativos o de protesta.

Una forma de hacer que siempre ha engrandecido a la abogacía de esta ciudad, pero que, si no se mantiene, si no se cuida, si no se trabaja, termina por deteriorarse. Por ello deseo que cada uno de nosotros seamos capaces de hacer un generoso esfuerzo para recordar que —a pesar de las discrepancias que surgen como en cualquier institución democrática— detrás de cada opinión existe una persona. Abogadas y abogados que forman parte de una comunidad, personal y profesional.

Confío en la fuerza, la unión y la solidaridad de la abogacía de Valladolid. Lo hago con honor y convencimiento.

Una confianza que no cesará, aun plenamente consciente de las fisuras actuales, que me gustaría ser capaz de comenzar a sellar a través de estas sinceras líneas. Unidos no sumamos, sino que multiplicamos.

Y así lo hemos demostrado con el extraordinario comportamiento de quienes habéis participado en las VIII Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE, tanto con vuestras aportaciones durante las diferentes mesas de debate como con el desarrollo de vuestro fundamental papel de anfitriones. Una vez más, Valladolid será, como lo fue en el XII Congreso de la Abogacía Española de mayo de 2019, un punto de inflexión; ahora respecto de la futura, pero cada vez más cercana, nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por último, si no podía empezar estas líneas sin despedirme de Begoña, no puedo tampoco terminarlas sin hacerlo también, con enorme cariño, respeto y reconocimiento, de quien ha sido nuestra presidenta durante los último ocho años: Victoria Ortega. Vicky —como le gusta que la llamen— ha sido un referente en el esfuerzo por y para la abogacía española, cuya estela resulta imposible de seguir. Es incombustible.

A su incesante y fructífero trabajo, hay que unir, en el ámbito territorial en el que nos movemos, su especial afecto hacia una ciudad como Valladolid, en la que ha pasado gran parte de su infancia y en la que ha desarrollado toda su formación universitaria. No tengo palabras de agradecimiento a la incondicional confianza que ha depositado en mí y en este Colegio. Muchas gracias, Vicky, por tu generosidad y por tu esfuerzo; te deseamos todo lo mejor en tus nuevas responsabilidades, ahora al margen de la abogacía institucional, pero siempre pendiente de ella.

Escribo estas líneas sin conocer aún el resultado de las elecciones a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía, pero queriendo dejar claro que, sea quien sea el nuevo presidente o la nueva presidenta, podrá contar con el apoyo del Colegio de la Abogacía de Valladolid en todo aquello que pueda constituir una mejora para la profesión y un beneficio para los profesionales que la conformamos.

Recibid un fuerte abrazo. ■

NOTICIAS DE INTERÉS



PARA LOS COLEGIADOS



Salón de actos del ICABA durante la celebración de las VIII Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita

VIII JORNADAS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Abogados de toda España sientan en Valladolid las bases de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Más de 200 especialistas reunidos por el CGAE abogaron por el “máximo consenso”

Más de 200 abogados especializados en turno de oficio se reunieron en Valladolid los pasados 18 y 19 de abril para debatir acerca de cómo ha de ser la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que el Gobierno tiene previsto aprobar este año y que sustituirá a la actual normativa, vigente desde 1996. Lo hicieron durante las VIII Jornadas de Justicia Gratuita que organiza el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y que en esta ocasión se celebraron en la capital vallisoletana.

En las jornadas se recogieron las aportaciones de los expertos para la redacción de esta nueva norma, cuyo contenido está ya consensuando entre el CGAE y el Ministerio de Justicia. Las jornadas tuvieron un formato más participativo de lo habitual con el fin de recoger el mayor número de aportaciones de los asistentes.

La Abogacía reclamó la máxima participación de todos los sectores para consensuar una nueva ley que mejore las condiciones en las que se presta este servicio esencial. “Es necesario contar con una nueva ley de Asistencia Jurídica Gratuita, porque la ley de 1996 no da cobertura a las necesidades

actuales”, afirmó en la inauguración la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega.

En la inauguración intervino también la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Sofía Puente Santiago, quien confirmó que el Ministerio se ha comprometido a redactar este año una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; recordó además que el proyecto de Ley de Derecho de Defensa, recoge una enmienda que incluye la defensa de las personas jurídicas, que era una laguna de la ley de 1996 y una de las reivindicaciones de la Abogacía.

“Si hacemos una buena ley a partir de ahora podremos tener una justicia gratuita como se merece la ciudadanía, que sí recibe los servicios pero el trato a los profesionales no es el adecuado”, aseguró el decano de Valladolid y secretario general del Consejo de la Abogacía, Javier Martín.

Por su parte, Ortega aseguró que la actualización de los baremos que cobran los profesionales del turno de oficio tendrá lugar sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado.

En la mesa de apertura participaron igualmente el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Iscar, y el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago.

En las jornadas tuvieron lugar distintas mesas redondas, como la de representantes de las asociaciones profesionales para recoger sus propuestas, con la participación de CEAJ, DEFENDA, el sindicato VENIA, la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados.

Igualmente, se celebró un debate con responsables de Justicia en el Congreso de los Diputados (Mercè Perea, del PSOE; Fernando de Rosa Torner, del PP; y Javier Ortega Smith, de Vox) para recabar sus opiniones sobre la futura ley.

Además en estas jornadas, a las que asistieron cerca de 200 profesionales, se abordaron en detalle las cuestiones fundamentales de la asistencia jurídica gratuita como los requisitos, competencias y procedimientos para el reconocimiento de este





derecho, los servicios de asistencia letrada, las subvenciones y el papel del abogado y procurador en los servicios del Turno de Oficio.

Entre las reclamaciones, la inclusión entre los beneficiarios a los solicitantes en la ley de la segunda oportunidad, y también la conciliación previa laboral y la reclamación previa administrativa.

Tener en cuenta a la abogacía

En las conclusiones alcanzadas tras los dos días de intenso debate, se señala que la nueva norma "debe respetar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita y tener en cuenta principalmente a la Abogacía que

gestiona y presta el servicio". Y destaca la necesidad de "homogeneizar para todo el territorio nacional un elenco mínimo de las actuaciones procesales y extraprocesales en las que intervienen los profesionales de la abogacía en materia de justicia gratuita que son susceptibles de contraprestación económica".

Además se reclama que se fijen "criterios suficientes, sostenibles y equilibrados, sobre la financiación de este servicio público, de tal forma que cuenten con cobertura presupuestaria los costes del mismo".

Y en ese sentido se pide que se introduzca "el criterio de pago universal al profesional de la abogacía por el cual se garantizaría la contraprestación en todas las actuaciones realizadas por designación

colegial -a través del turno de oficio- o por requerimiento judicial, y ello aun cuando el justiciable no sea acreedor del derecho a la justicia gratuita, o le sea denegado -y éste no haya abonado los honorarios del profesional-".

La cuestión del incremento de los baremos se recoge también, ya que se pide que se introduzcan criterios "para la actualización de las compensaciones y pagos que al menos contemplen las modificaciones del IPC anual".

Asimismo, se reclama que se amplíen los servicios de asesoramiento jurídico inicial y gratuito a determinados sectores, como a las mujeres ante cualquier supuesto de violencia, a presos, inmigrantes y supuestos de protección internacional. ■



Nuria de Antonio, María José Llansol y Trinidad Piquer con Ahmed

Además de por las distintas reivindicaciones y conclusiones que se alcanzaron, las jornadas de asistencia jurídica gratuita de Valladolid se recordarán por un emotivo episodio, que sin duda reafirma a todos los colegiados comprometidos en su labor en turno de oficio.

El episodio aludido fue el encuentro totalmente casual y provocado por las citas lúdicas de las Jornadas en uno de los locales del Pasaje Gutiérrez de la ciudad, de Ahmed, uno de los migrantes del Buque Aquarius, con las abogadas del Colegio de Valencia que acudieron a la asistencia letrada masiva a su llegada al puerto de dicha ciudad: Trinidad Piquer García, ahora Diputada encargada del turno de oficio, M^a José Llansol Climent, ahora presidenta de la sección de turno de oficio y Nuria de Antonio Chicote, ahora vocal de la sección de turno de oficio.

En la actualidad, Ahmed compagina sus estudios con su trabajo como camarero en el bar en el que se produjo el reencuentro.

Ahmed, entonces un niño, fue uno de los protagonistas de aquel episodio en que, tras varias semanas vagando por el Mediterráneo, a la espera de que algún país le abriera las puertas, y ser rechazado por Italia y Malta, el día 17 de junio de 2018 el buque Aquarius llegó al puerto de Valencia. Fue entonces cuando las compañeras anteriormente mencionadas junto con resto de letrados de la sección de extranjería, y demás secciones del turno de oficio, y encabezados por Rebeca Lino y la diputada entonces Esther Sanchís dirigieron la coordinación con la Consellería para asistir a nada más y nada menos que 629 migrantes rescatados.

Encuentro casual que ha sido solamente posible por la implicación de las compañeras en el turno de oficio en aquel momento, hace seis años, y en la actualidad, con su participación en las Jornadas del Consejo General de la Abogacía en Valladolid, ciudad de acogida de Ahmed, y donde se ha forjado su nueva vida.

ESPERANZA

Historias de superación que reafirman la vocación por el turno de oficio

Emotivo reencuentro durante las jornadas de un migrante del Buque Aquarius con las letradas que le asistieron



FOTO: CGAE

ESTADÍSTICAS

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en el ICABA alcanzaron por primera vez el millar

Los 7.157 expedientes tramitados por el Turno de Oficio suponen un 3,9% menos que en 2022

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en Valladolid alcanzaron en 2023 el millar de casos por primera vez tras dispararse un 31,1 % con respecto al año anterior. “Las víctimas tienen más

información, saben que cuentan con este servicio y tienen algo menos de miedo a denunciar, pero el aumento de solicitudes evidencia que la violencia contra la mujer es un problema que, lejos de corregirse, cada

año se incrementa”, señala el responsable del Turno de Oficio del ICABA, Fernando Rosat. A pesar del aumento de los casos de violencia de género, el número total de expedientes de justicia gratuita descendió en 2023, pasando de las 7.445 solicitudes de 2022 a 7.157 el año pasado, la cifra más baja del último lustro a excepción del año del confinamiento.

La Comisión Provincial ha dejado fuera a un 4% de las solicitudes presentadas al detectarse algún tipo de defecto formal, a pesar de que los abogados habían realizado la asistencia. En estos casos no se reconoce la justicia gratuita al ciudadano y no se compensa al profesional por el servicio prestado, ni al Colegio por las labores de tramitación.

Denuncias falsas por debajo del 0,1%

La tendencia marca un aumento continuado de los casos de violencia de género, mientras que el número de condenas por denuncia falsa se mantiene por debajo del 0,01 %.

Dentro de los expedientes penales, también han subido los de menores, un 16,1 % con respecto a 2022. En este mismo periodo cayeron, además de los de instrucción, aquellos asuntos relacionados con el juzgado penal (34,9 % menos), mientras que los de vigilancia penitenciaria se mantuvieron idénticos a los del año pasado. Los de la Audiencia Provincial también subieron al pasar de 12 a 18,

En otras jurisdicciones, los asuntos civiles protagonizaron un descenso aún más acusado que los penales, ya que experimentaron una caída del 10,3 %, con 1.566 expedientes tramitados en 2023.

Principales incrementos

La jurisdicción Social fue la que más se incrementó en el último año al pasar de 279 a 379 expedientes atendidos, lo que supone una subida del 35,8 % en los últimos doce meses.

También los expedientes de Extranjería experimentaron una subida, con 270 casos frente a los 224 del año previo.

Por su parte, los asuntos contencioso-administrativos aumentaron, de 206 a 260, mientras que los expedientes de la jurisdicción Militar se elevaron de 5 a 6 en el último año.

El Turno de Oficio de Valladolid cuenta con 433 abogados inscritos que afrontaron los 7.157 asuntos atendidos en 2023. Por jurisdicciones, más del 65 % de las tramitaciones pertenece a la Penal, el 21,9 % a la Civil, el 5,3 % a la Social, el 3,8 % a la de Extranjería y el 3,6 % a la Contencioso Administrativa. Las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género, por sí solas, representan un 14 % del total de asuntos tramitados en el último año por el servicio de justicia gratuita del ICABA, cuatro puntos más que el año pasado. ■

PROTESTAS POR TURNO DE OFICIO



FOTO: MARTA DÍAZ

REIVINDICACIONES DEL TURNO DE OFICIO. Un grupo de colegiados del ICABA visibilizó su descontento con la situación de los abogados de oficio en un acto a la puerta del Colegio durante las Jornadas de Justicia Gratuita organizadas por el CGAE en Valladolid en el mes de abril. Este conjunto de letrados centra sus peticiones en distintas mejoras para el turno de oficio y algunos de sus miembros se mantienen en huelga desde noviembre de 2023, cuando el Sindicato Venia convocó paros y movilizaciones.

NUEVOS SERVICIOS DEL ICAVA

Los colegiados de Valladolid podrán designar compañeros para su sustitución por fallecimiento o enfermedad grave

Los ciudadanos podrán denunciar conductas no éticas a través del nuevo canal de denuncias

El primer semestre del año vino con novedades en los servicios prestados por el Colegio de la Abogacía de Valladolid, servicios dirigidos tanto a sus colegiados como a la ciudadanía en general.

Con relación a esta última, y en aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que establece la obligación para las empresas con 50 o más empleados y las administraciones públicas de contar con un canal de denuncias, se implementó dicha herramienta en el ICAVA, con enlace directo a la misma en su página web.

A través del canal, también llamado canal ético, los trabajadores, ciudadanos, proveedores, etc., podrán informar, de manera anónima si lo desean, sobre cualquier posible irregularidad o incumplimiento del Código Ético del ICAVA. Una vez recibida dicha información, y comprobada su veracidad, el comité ético del colegio velará por la investigación de las posibles irregularidades y evaluará las mismas, siendo el encargado de resolver las cuestiones.

Por otro lado, en el mes de mayo se implantó para los colegiados del ICAVA el

testamento profesional, previsto para facilitar una solución ágil y segura ante situaciones sobrevenidas de fallecimiento o enfermedad prolongada e incapacitante del profesional.

A través de dicho documento, los otorgantes podrán escoger a varios profesionales de su confianza —que deberán consentir dicha designación— para que les sustituyan en las funciones de dirección y defensa en los asuntos que se estén tramitando en el caso de que se den tan graves circunstancias, dejando así mismo las instrucciones precisas acerca de cómo acceder a los registros y expedientes. La persona designada quedará vinculada por los acuerdos previos alcanzados entre el letrado testador y el cliente, quedando la sustitución sin efecto en caso de que el cliente la rechace expresamente.

El testamento profesional, que se podrá modificar o cancelar en cualquier momento, se presentará al ICAVA en el modelo normalizado y conforme a las pautas e instrucciones que se encuentran en la web y, una vez remitido, quedará depositado en los archivos del Colegio y registrado en el expediente de cada colegiado, a fin de facilitar el ICAVA la facultad de comunicarse con los sucesores en caso de que se dieran las circunstancias. ■

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO

Adjudicado al ICAVA el servicio de asesoría jurídica a usuarios de CEAS y segunda oportunidad

El Ayuntamiento de Valladolid aprobó el 3 de junio la adjudicación al ICAVA, hasta 2027, del contrato del servicio de asesoramiento jurídico en materia de derecho de familia y penal, tanto para personas usuarias como para personal técnico de los servicios sociales básicos, y por otro lado para el asesoramiento jurídico y atención legal a personas que puedan acogerse a de segunda oportunidad.



Pleno Ayto. de Valladolid / Foto: Ayto. de Valladolid

Con un presupuesto anual de 7.986 euros, el servicio se lleva a cabo mediante un sistema de 'turno de oficio' por los profesionales que se adscriben al mismo y sus intervenciones normalmente son a través de entrevistas presenciales, aunque también hay asesoramiento telefónico, a los técnicos del servicio que lo demandan.

En 2023 en el servicio de asesoría de segunda oportunidad se atendieron 49 casos y en el de apoyo en derecho de familia fueron 37 las atenciones.

SOLIDARIDAD COLEGIAL



CONVENIO ENTRE EL ICAVA Y LA FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES. El convenio contempla el asesoramiento jurídico, de manera altruista, a menores migrantes vulnerables durante los procesos de determinación de la edad, así como a labores de sensibilización entre operadores jurídicos para promover buenas prácticas en la atención a una infancia migrante que debe atravesar procesos judiciales.

ACADEMIA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA



NUEVOS ACADÉMICOS. La Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid eligió el 16 de abril al letrado del ICAVA Jesús Lozano Blanco, para ocupar la plaza vacante del compañero fallecido en 2020 Jerónimo Gallego Pérez. En el mismo acuerdo se nombró al catedrático de Derecho Civil de la UVA, Andrés Domínguez Luelmo, que ocupará la plaza vacante de Vicente Guilarte Zapatero.



Asistentes a la Junta General Ordinaria

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El ICAVA comienza a abonar los desplazamientos durante las guardias de asistencia a detenidos

La compensación del servicio a cargo del Colegio fue uno de los principales asuntos tratados en la Junta General Ordinaria 2024

De conformidad con lo establecido en los Estatutos que lo regulan, el ICAVA celebró la primera Junta General Ordinaria el pasado día 20 de marzo, en el salón de actos del Colegio Camilo de la Red.

En la misma, tras una lectura por parte del decano del Colegio, Javier Martín García, de los acontecimientos más importantes del ICAVA durante el año anterior —con especial referencia a las conversaciones y acuerdos con magistrados y letrados de la Administración de Justicia durante las huelgas que protagonizaron en 2023—, fue aprobada por mayoría la cuenta de ingresos y gastos del año anterior —ejecución presupuestaria—. A continuación, los asistentes interesados

podieron hacer las preguntas que consideraron, a las que tanto el decano como el tesorero dieron las oportunas respuestas.

Como cuestiones a destacar, se informó a los presentes del ahorro experimentado en el gasto por consumo eléctrico, debido a la instalación y puesta en funcionamiento en 2023 de las placas solares en las cubiertas del Colegio —que a la vez conlleva una reducción de emisiones de CO²—, así como el inicio del abono de manera semestral de los desplazamientos de los letrados en labores de asistencia en turno de oficio, abono a cargo del colegio sin perjuicio de seguir reclamando la asunción de dicho gasto por parte del Ministerio de Justicia. ■

CAFETÍN DEL COLEGIO

UNA CARA NUEVA AL FRENTE DEL CAFETÍN.

El pasado mes de febrero fue el momento elegido por Begoña Alejandro para su jubilación, dejando así el Cafetín del Colegio, que regentaba desde 2017. Tras un proceso de selección entre varios interesados, finalmente se acordó la contratación de Álvaro González, quien se hizo cargo del Cafetín a finales de marzo, con el reto y la ilusión de iniciar una nueva etapa al frente de un punto de encuentro clave en las relaciones entre colegiados.



Álvaro González

PUBLICACIONES



Las prácticas comerciales agresivas como acto de competencia desleal.

Autor: Sergio M. Castro González

La obra aborda un análisis de las prácticas agresivas como acto de competencia desleal que se ubica en la intersección entre el derecho de la competencia y el derecho de los consumidores. A continuación, se examinan desde la óptica del derecho de la contratación, el comercio electrónico y el derecho penal, finalizando con un estudio de la aplicación tanto privada como pública de dichas prácticas.



Defensa de las personas jurídicas en el proceso penal español. Especial

Autor: Óliver Pascual Suaña

El libro analiza las especiales opciones defensivas que tienen las personas jurídicas cuando aparecen como sujeto pasivo de un proceso penal. En particular, se estudian los requisitos que deben tener los modelos de prevención penal para lograr la exoneración de responsabilidad penal de las empresas, y su posible acreditación mediante los conocidos como informes periciales de *compliance*.

DECESOS

Compañeros fallecidos

JAIME RUIZ -CAMARA INCHAURTETA

CITA ELECTORAL

ELECCIONES PARA REPRESENTANTES ANTE LA MUTUALIDAD.

Dos fueron las ocasiones en los que los mutualistas de la Mutualidad de la Abogacía acudieron al salón de actos Camilo de la Red del ICAVA para elegir a los representantes territoriales en sendas asambleas ordinarias y extraordinaria celebradas en mayo y en junio. Numerosos mutualistas —únicamente alternativos la primera de las ocasiones, y la totalidad en la segunda— acudieron a votar en unas elecciones más concurridas que nunca, que se celebraron sin incidencias y arrojaron unos resultados ajustados en ambas ocasiones, todo ello fruto de los últimos y enfrentados debates surgidos en torno a la exigencia de una pasarela al RETA y de la gestión por parte de la Mutualidad de los ahorros de sus mutualistas.



NUEVO JUEZ DECANO



ALBERTO MATA SUSTITUYE A EMILIO VEGA AL FRENTE DEL DECANATO DE VALLADOLID. Tras el cese de Emilio Vega como juez decano de Valladolid, por su traslado a la Audiencia Provincial de León, se celebraron elecciones al cargo el pasado 1 de marzo, resultando elegido para el cargo Alberto Mata Saiz, titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de la ciudad desde 2019, siendo este su primer destino en Valladolid, donde llegó desde el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona, provincia donde desarrolló gran parte de su carrera judicial. El nuevo juez decano es experto en derecho concursal y mercantil y ha impartido clases en instituciones como la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y, actualmente, en la Universidad de Valladolid.

PROCURADORES

Aprobado en nuevo arancel de la procura

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes aprobó el 30 de abril un real decreto que establece el arancel de los procuradores. El nuevo texto establece la cuantía global por derechos devengados por el profesional de la procura en un máximo de 75.000 euros por asunto y en sus diferentes instancias, quedando prohibida la fijación de límites mínimos. En todo caso, el procurador y el cliente tendrán libertad para pactar la retribución de los servicios profesionales prestados por el primero en una cantidad inferior a lo previsto en el arancel, pero en ningún caso podrán pactarse precios que superen el límite máximo.

983 275 086

 **alvaroman** ECO
MERCHANDISING
www.alvaroman.com

MERCHANDISING TRADICIONAL Y ECOLÓGICO PARA EMPRESAS

Los derechos de retracto en fincas rústicas

Por Celia Miravalles Calleja,
abogada

Es habitual encontrarnos en el despacho con la consulta acerca de si hay un colindante o un arrendatario en el terreno con derecho de retracto —art. 1521 Código Civil—. Por ello es importante tener presente todos los tipos de retracto que nos podemos encontrar, así como quién tiene preferencia, para ver si nuestro cliente podrá comprar la finca sin problema o en caso de tener un posible retrayente plantearnos si este cumple todos los requisitos exigidos legalmente para salir al retracto.

¿QUÉ TIPOS DE RETRACTO NOS PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMPRAVENTA DE FINCAS RÚSTICAS?

- 1.—Retracto de coherederos: Si algún coheredero vende su parte de la herencia de la finca a un tercero, los demás coherederos podrán subrogarse en el lugar del comprador en el plazo de un mes (art. 1067 del Código Civil).
- 2.—Retracto de copropietarios: Si un copropietario vende su parte de la finca a un tercero, los demás pueden adquirir esa parte con preferencia al tercero en el plazo de nueve días (art. 1522 del Código Civil).
- 3.—Retracto de colindantes de finca inferior a una hectárea: Tienen derecho de retracto, en el plazo de nueve días desde la inscripción en el Registro, los colindantes cuando se trate de la venta de una finca cuya cabida no exceda de una hectárea y siempre que no estén separadas por arroyo, caminos, etc. (art. 1523 del Código Civil).
- 4.—Retracto de colindantes que sean explotación prioritaria: Los propietarios de fincas colindantes que sean titulares de explotaciones agrarias prioritarias pueden salir al retracto de la venta de una finca cuya cabida sea inferior al doble de la unidad mínima de cultivo. El plazo será un año desde la inscripción en el Registro de la propiedad o 60 días si hubo notificación, conforme recoge el art. 27 de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias de 1995.
- 5.—Retracto de arrendatarios: la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 y la reforma de 2005 —no la Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003— recogen que en toda transmisión *inter vivos* (venta, donación, permuta...) de una finca rústica, el arrendatario que sea agricultor profesional



Fincas rústicas en Valladolid. / FOTO: P.L. ÁLVAREZ

tendrá derecho de tanteo y retracto en el plazo de 60 días desde que le notificaron la venta o 60 días desde que haya tenido conocimiento de la venta.

- 6.—Retracto convencional: derecho de adquisición preferente que tiene un origen voluntario, porque previamente ha habido un acuerdo entre las partes. Realmente no es un retracto, sino un derecho que surge cuando quien ha comprado la finca la vuelve a vender, porque durante un tiempo determinado el vendedor tiene derecho a recuperar la finca cuando él quiera, siempre y cuando se cumplan los requisitos marcados en el acuerdo (art. 1507 y siguientes del Código Civil).

¿QUIÉN ES PREFERENTE EN UN RETRACTO DE FINCA RÚSTICA: EL COLINDANTE, EL COMUNERO O EL ARRENDATARIO?

- 1.—Preferencia entre arrendatario y colindante: es preferente el arrendatario, con una excepción. Conforme al art. 22 de la Ley 49/2003 de 26 de noviembre, según modificación realizada por la ley 26/2006, el arrendatario tendrá derecho de retracto en toda transmisión *inter vivos* de fincas rústicas (compraventa, donación, aportación a sociedad, permuta, adjudicación en pago...). El derecho de retracto del arrendatario prevalece o

es preferente con respecto a cualquier otro derecho de adquisición, es decir, prevalece frente al retracto de colindantes y de comuneros o copropietarios, con una excepción: es preferente el retracto de colindantes (art. 1523 Código Civil) cuando tanto la finca objeto de retracto y la finca colindante no excedan ninguna de una hectárea.

Las sucesivas leyes de arrendamientos rústicos han ido regulando la preferencia del arrendatario, con la salvedad de la Ley 49/2003, que entró en vigor en mayo de 2004 y suprimió el derecho de retracto para los arrendatarios, hasta que la reforma de la misma por la Ley 26/2006, que entró en vigor en enero de 2006, rehabilitó este derecho de retracto. Por tanto, si el contrato de arrendamiento rústico se celebró entre mayo de 2004 y enero de 2006, para la mayoría de la doctrina y jurisprudencia menor tendrían preferencia los colindantes a los arrendatarios.

- 2.—Preferencia entre arrendatario y comunero o copropietario: es preferente el arrendatario. Conforme el art. 22 de la Ley de Arrendamiento es preferente el arrendatario frente a los demás derechos de adquisición preferente, con la salvedad de si el contrato de arrendamiento rústico se celebró entre mayo de 2004 y enero de 2006 en que el arrendatario no tiene derecho de retracto. ■

El complemento de paternidad

La prestación se contempla para aquellos jubilados que teniendo dos o más hijos cumplan con una serie de requisitos

*Por Antonio Berdugo Manzano,
abogado*

La pensión contributiva por antonomasia es la pensión de jubilación que, como todos sabemos, es el percibimiento de una cantidad de dinero que se recibe de manera mensual y con carácter vitalicio por parte de la Seguridad Social al cesar la actividad laboral y previo cumplimiento de una serie de requisitos en forma de edad y años cotizados.

Pues bien, desde el año 2016 existe en nuestro país un complemento denominado “de maternidad por aportación demográfica” que originariamente se creó para aquellas mujeres que hubiesen tenido dos o más hijos biológicos o adoptados y su función era reconocer un complemento a la pensión de jubilación, viudedad o de incapacidad, de las mujeres por su aportación demográfica a la Seguridad Social y por el futuro respaldo que previsiblemente esos hijos harán a la misma.

Dicho complemento, que se reconocía en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y se calculaba en función del número hijos, y consistía en sumar al resultado de la pensión, un 5 % en caso de tener dos hijos, un 10 % en caso de tener tres, o un 15 % en caso de tener cuatro o más hijos.

Actualmente y tras una serie de disputas judiciales que expondremos, este complemento se acabó reconociendo mayoritariamente en nuestros juzgados y tribunales a los hombres, naciendo así el denominado “complemento de paternidad” o “complemento de maternidad para hombres”.

Por otro lado, el conflicto no se quedó parado en el mero reconocimiento, sino que, tal y como veremos, actualmente se ha reconocido que dicha reclamación no prescribe y que los efectos económicos de la misma se reconocen desde la fecha de jubilación.

A) ORIGEN DEL CAMBIO

La concesión de este complemento estaba destinado únicamente a las madres trabajadoras, tal y como hemos expuesto; sin embargo, en el año 2017 se reconoció a un hombre, padre de dos hijas, una pensión de incapacidad permanente absoluta. El beneficiario de esta pensión reclamó posteriormente al Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante una reclamación administrativa previa que, al ser padre de dos hijas, tenía derecho a ser reconocido el complemento de la pensión del artículo 60 de la LGSS y la Seguridad Social se lo desestimó alegando que era un complemento que se reconocía únicamente a mujeres trabajadoras.

Como este hombre no se aquietó —probablemente motivado por un buen profesional de la abogacía— decidió presentar el preceptivo recurso ante los juzgados de lo social de su ciudad natal, alegando que existía una discriminación por razón del sexo que era contrario a los principios europeos.

El asunto recayó en el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona, y consideró que el reconocimiento solo para mujeres del complemento de maternidad podía ser contrario a la Directiva 79/7/CEE, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, y planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fue resuelta por sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/2018), que consideró que el art. 60 LGSS vulneraba la normativa europea al conceder un trato menos favorable a los hombres que han tenido dos o más hijos, considerando este trato menos favorable como una discriminación directa por razón de género.

Tras esta sentencia —que fue pionera y la que marcó el origen del cambio jurisprudencial— el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona, en su sentencia 79/2020 de 13 de marzo, obligado en cierta medida por el derecho europeo, acabó reconociendo el derecho al complemento de aquel padre en un 5 % al tener dos hijas.

A raíz de esta sentencia, la mayoría de los juzgados y tribunales de nuestro entorno modificaron su criterio y se adaptaron al criterio europeo hasta que el Tribunal Supremo lo confirmó en sus Sentencias n.º 163/2022 de 17 de febrero de 2022 y n.º 487/2022 de 30 de mayo de 2022.

B) TRÁMITES Y REQUISITOS PARA RECLAMAR LA PENSIÓN

El varón que quiera reclamar la pensión complementaria deberá conocer que únicamente tendrá derecho a ella si se cumplen los siguientes requisitos: 1) Haberse jubilado entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021; 2) tener derecho a una pensión de jubilación y haberse visto afectada su carrera profesional en forma de interrupción de los días cotizados por el nacimiento de los hijos, 3) no tener una prejubilación voluntaria, y si es forzosa, en forma de ERE o despido, deberá acreditarse.

Si se cumplen esos requisitos, el siguiente paso es iniciar los trámites para reclamarlo, y estos son los siguientes:

1) Presentar solicitud ante la Seguridad Social

Se debe presentar un modelo normalizado ante el INSS denominado “solicitud de revisión de prestaciones” y al rellenarlo se deberá incluir que lo que se precisa es el reconocimiento del complemento de maternidad para padres, o simplemente el



FOTO: PIXABAY

complemento de paternidad. A dicha solicitud, se deberá adjuntar el libro de familia y los certificados de nacimiento de los hijos y copia de la resolución de la pensión donde se reconoce la misma.

2) Denegación de la solicitud por parte de la Seguridad Social

Hasta la fecha, y pese a los múltiples fallos en todo nuestro entorno nacional y aunque existe una doctrina y jurisprudencia consolidada y unificada acerca de este reconocimiento, el INSS venía denegando este complemento, y bien lo hacía alegando que este derecho solo se reconocía a mujeres o bien que ya habría prescrito.

Cabe señalar que recientemente el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido en su criterio de gestión n.º 5/2024 de 8 de marzo de 2024: “el Tribunal Supremo en su sentencia n.º 322/2024 de 21 de febrero ha unificado su doctrina y considera que el derecho al reconocimiento del complemento es imprescriptible y que los efectos económicos se deben reconocer desde el nacimiento de la propia pensión”, y de esta manera ha modificado su criterio y pasa a reconocerlo, si bien no menciona en ningún momento si lo hará de oficio, habrá que reclamar o qué ocurrirá con los procedimientos que están en curso.

3) Presentación de reclamación previa a la vía jurisdiccional en caso de denegación

El art. 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, establece sobre el carácter previo

de la reclamación administrativa en materia de seguridad social que “Será requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social, que los interesados interpongan reclamación previa ante la Entidad gestora de las mismas”.

La Seguridad Social tiene un plazo de 45 días para contestar, y si no lo hace, se entenderá denegada por silencio administrativo.

4) Presentación de demanda ante los juzgados de lo social

Si una vez notificada la resolución sobre la reclamación previa esta fuese denegada, se abre un plazo de 30 días hábiles para presentar la demanda judicial en el juzgado de lo social.

C) IMPRESCRIPTIBILIDAD Y EFECTOS ECONÓMICOS

Como hemos dicho, una de las razones más comunes de denegación por parte del INSS era mantener que la acción de reclamación había prescrito por aplicación del artículo 53 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que el plazo general de reconocimiento de prestaciones era de cinco años.

Esto era objeto de debate, pues había tribunales que entendían que la acción no prescribía, y otros que prescribía a los cinco años. Sin embargo, tras la publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y para fijar un criterio unánime, el Tribunal Supremo en su reciente sentencia n.º 322/2024 de 21 de febrero de 2024 destaca: “debemos reiterar la

doctrina que sostiene que el reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica producirá efectos desde la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos por la redacción original del artículo 60, lo que determina, tal como se ha anticipado que al tratarse de una discriminación por razón de sexo contraria al principio de no discriminación y al derecho a la igualdad en los términos del artículo 14 CE y del derecho de la Unión Europea al que se acaba de aludir, su íntegra reparación no puede ser otra que retrotraer sus efectos al momento del hecho causante, sin que sea dable entender que la solicitud tardía del complemento en cuestión deba entenderse prescrita”.

Todo ello ha conducido a reconocer los efectos económicos desde el reconocimiento de la propia pensión de jubilación.

Por tanto, dicha sentencia, que además fue en pleno, ratifica que la acción no prescribe y fue el germen del cambio de criterio de la Seguridad Social, que publicó el criterio de gestión n.º 5/2024 de 8 de marzo al que nos hemos referido anteriormente.

En conclusión, el complemento de paternidad es un complemento que se reconoce a todos los padres que tengan una pensión de jubilación o incapacidad permanente, que se hayan jubilado entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 y que tengan dos o más hijos y cumplan los requisitos ya explicados. Ahora la cuestión estriba en si tras el cambio de criterio del INSS, se reconocerá a todos de oficio, u obligarán a pleitear. ■



EN EL CAFETÍN

Con

YOLANDA GUTIÉRREZ



DECANA DEL COLEGIO DE PROCURADORES DE VALLADOLID

*Por Elisa Campillo,
periodista*

“Sería bueno que todos los que estudian para ser abogados pasaran una semana por un despacho de procuradores”

De sus 31 años como colegiada, Yolanda Gutiérrez ha pasado los últimos 16 como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Valladolid. La mitad de su vida profesional. Después de trabajar codo con codo con tres decanos, en noviembre de 2023 y animada por sus compañeros dio el paso para ponerse al frente de la institución que comparte edificio —y Cafetín— con el ICAVA. “Muchas veces nos quejamos de las cosas, así que siempre me ha interesado mucho ver cómo se cambian desde dentro”, confiesa.

Pregunta.— ¿Cómo llegó a ser procuradora?

Respuesta.— Yo quería ser procuradora, pero no conocía a nadie. Y todos los días cuando pasaba por la calle Torrecilla veía una placa: ‘Procuradora’. Cuando empecé la Escuela de Práctica Jurídica, un día llamé a la puerta. Era una señora que se llamaba Virginia de Andrés y le dije que si necesitaba gente, porque antes no había prácticas. Y se quedó impactada, me dijo que no pero que le dejase mi teléfono por si acaso. Pasó un mes y no me llamó, así que volví a subir. Y me dijo: “He perdido tu teléfono, le ha dado un infarto a mi padre, necesito, por favor, que vengas”. A partir de ahí estuve tres años en su despacho.

P.— ¿Volvería a elegir ese camino?

R.— Sí, si no hubiera cambiado tanto. La manera de hacerlo me gusta y el trabajo me encanta, pero no cómo ha evolucionado. Me quedaría con los avances, pero no con lo que nos perjudica, que son muchas cosas.

P.— ¿Cuáles?

R.— Nosotros éramos un vínculo muy cercano entre juzgados, abogados... Ahora nos hemos convertido casi en meros registradores de presentación de demandas telemáticas. No tienes opción a dedicarte con tiempo a los asuntos porque no lo tienes, porque es mucha avalancha de información que nos llega y hay que gestionarla al día. Y la cercanía también se ha perdido.

P.— Especialmente a raíz de la pandemia, que aceleró todo un poco.

R.— Nosotros ya estábamos en eso, pero con los juicios telemáticos ya se perdió el contacto incluso entre compañeros. Antes venías todos los días al Colegio, recogías tus notificaciones aquí... Ahora es mucho más individualista. Da pena, porque el trato enriquecía muchísimo. Hablabas con el compañero, te desahogabas, te quedabas a gusto.

P.— ¿Cómo han sido estos primeros meses al frente del Colegio?

R.— Estoy contenta. Con mucha tarea, porque el trabajo no para porque seas decana. Pero con la colaboración de toda la Junta, muy bien. Hay que delegar, no se puede estar para todo. Hay que confiar, porque el otro lo va a hacer igual que tú, o mejor. Además, el Colegio fluye por el trabajo impagable de nuestras dos empleadas, que se desvelan porque todo funcione y por ayudar a todos los colegiados.

P.— ¿Cuáles son los principales retos?

R.— En marzo hemos tenido modificaciones legislativas con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2023 sobre eficiencia procesal y en mayo se han aprobado los nuevos aranceles después de 20 años. Hay cambios también a nivel del Consejo General, que ha adelantado elecciones. Eso es un poco lo que me he encontrado al llegar. Lo que yo pretendo es que haya buen trato con todos los operadores jurídicos porque es la manera de poder trabajar mejor. Luego también nos gustaría intentar lograr una mejor conciliación y dignificar un poquito el turno de oficio, que como siga así al final no va a haber gente...

P.— Los aranceles, por fin. ¿Hay satisfacción?

R.— Pues no, porque hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo que parece que va en contra de estos aranceles, y hay colegios y colectivos que se están planteando recurrir. Pero claro, quizá si se recurre volverían los que teníamos anteriormente, entonces hay que sopesar muchos condicionantes. Hay cosas buenas en estos aranceles, aunque no ha sido la subida exponencial que debería haber sido en 20 años. El problema es que nos hemos ido a unos aranceles de máximos, con lo cual por debajo no hay límite, y los despachos unipersonales nos encontramos con el frontón de las grandes plataformas que abaratan los precios.

P.— Eso me recuerda a lo que sufren los pequeños despachos de abogados...

R.— Correcto, igual. Y me parece bien, que hay que evolucionar y que nos tenemos que asociar. ¡Pero sin tirar los precios!

P.— ¿Tenemos un problema con la conciliación?

R.— Bastante gordo. Pero nosotros además tenemos el hándicap de las notificaciones, que nos llegan a lo largo de toda la mañana. Si se agruparan, por ejemplo, 9 a 11 horas, tendríamos margen para despacharlas, o por lo menos ir viendo si es algo urgente. Al final, las que llegan a última hora colean por la tarde, las despachas, los abogados contestan... Sábados y domingos continuas igual, porque si quieres el lunes empezar de cero no te queda otra.

P.— ¿En eso ha sido un problema la digitalización?

R.— Cuando se trabajaba en papel, tú ibas por todos los juzgados, recogías las notificaciones y no volvías hasta el día siguiente. Podías planificarte tu horario. Ahora cada juzgado las envía cuando le viene bien. Y no sé por qué, los viernes a las dos de la tarde consideran que es buen momento. Los informáticos dicen que a veces se colapsa el flujo de notificaciones y luego salen todas a la vez, y es verdad que los secretarios están por la labor de colaborar, pero...

P.— El flujo no para ni estando de baja...

R.— Estamos intentando que por sistema pudiéramos tener hasta tres días sin notificaciones en ciertos casos. Si el abogado se pone enfermo, aporta un parte de baja y se suspende el juicio. En nuestro caso, no. Afortunadamente en el colectivo hay mucho compañerismo y nos sustituimos, pero qué menos que si se muere tu padre o das a luz se corten las notificaciones por defecto. En tres días te puedes organizar, nombrar a otro compañero... En agosto pasa lo mismo, pero nos organizamos muy bien con un servicio de guardias. [Resopla] Lo estoy pintando fatal...

P.— Bueno, ¡algo bueno también tendrá!

R.— ¡Claro! Yo estoy encantada, pero hay que hablar de los problemas. A mí me encanta la profesión, me encanta ser colaboradora de la justicia, de poder analizar las reformas. Yo las subrayo enteras, me las miro, es muy creativo. También es gratificante saber que puedes facilitar al abogado datos que a lo mejor se le habían escapado, o al juzgado...

P.— La nueva ley establece una prueba de acceso común para abogacía y procura. Ahora se va de la mano hasta el final...

R.— Yo doy clase en el Máster de la Abogacía y la Procura, y antes en la Escuela de Práctica Jurídica. Y es verdad que si estudias únicamente uno de los dos, desconoces lo que hace el otro. Quizá del abogado tenemos todos más visualmente lo que hacen, pero nadie tiene la



imagen del procurador. Y este año, que ha sido el primero, han tenido la ocasión de vernos y les ha resultado muy ilustrativo. Es que un abogado les va a contar una subasta y yo les voy a contar cómo hago la subasta. El abogado les va a contar un desahucio y yo les voy a llevar al lanzamiento para que lo vean.

P.— Y una vez superada esta prueba ya se puede ejercer cualquiera de las dos profesiones...

R.— Por eso sería bueno que todos pasaran una semana por un despacho de procuradores, porque casi todos hacen las prácticas con los abogados. Solo uno de 35 alumnos ha venido con nosotros este año. En cualquier caso, como abogado también está bien saber cómo trabaja un procurador.

P.—¿Cómo se atrae a los jóvenes para esta profesión?

R.— Ya desde la carrera habría que tener en cuenta y ofrecer todas las opciones. En la facultad, las profesoras que dan Derecho Procesal me llaman cuando hay que hablar del procurador. Ese día salen emocionados, pero además les digo que vengan al Colegio a vernos, que vengan a un juicio; porque un abogado igual tiene un juicio en una mañana y nosotros tenemos cinco. Es la manera, no hay otra.

P.— ¿Le atrae la docencia?

R.— Sí, pero porque me gusta mi trabajo. Como me gusta mi profesión quiero que la vivan, enseñarles y contarles las cosas buenas. Y si consigues atraer a alguno por esa vía...

P.— ¿Qué consejo les daría a quienes terminan el curso ahora?

R.— Que tengan ganas, que vayan a por lo que quieran, porque pueden hacerlo. Que no tengan miedo, que preparen oposiciones, ejerzan, se colegien, prueben. Yo creo que ahora tanto el Colegio de Abogados como nosotros estamos bien accesibles para que cualquiera nos pueda preguntar, antes era como una institución cerrada.

P.— ¿Qué tal la relación con los abogados?

R.— Siempre ha sido muy buena, y hemos tenido la suerte de que en esta ciudad ha sido muy fluida. El buen ambiente que se crea con los abogados con los que trabajas redunda en el propio trabajo. También a nivel de ayudas, de cursos, de invitarnos a distintas iniciativas... El salón lo tenemos conjunto, y eso une.

P.— ¡Y el Cafetín!

R.— Nuestras empleadas vienen todos los días a tomar café. Además, ahora hay gente muy joven en la profesión y eso también ayuda a trabajar a gusto, no ves caras cansadas. ■



Estanterías en el interior de una de las cámaras del Archivo General de Simancas

UN DÍA EN...

El Archivo General de Simancas

El fondo documental forma parte del Registro de la Memoria del Mundo y cuenta con 13 kilómetros lineales de estanterías que guardan más de 75.000 legajos

*Por Grecia Osorio,
periodista*

Para viajar en el tiempo no hacen falta máquinas ni mucha tecnología, y en Simancas lo saben bien. En esta localidad vallisoletana se erige uno de los edificios más importantes para conocer la historia de España desde finales del siglo XV hasta el XIX. Entrar en el Archivo General de Simancas (AGS) asegura un viaje en el tiempo a través de la documentación, con 13 kilómetros lineales de estanterías, más de 75.000 legajos y 9.000 imágenes, mapas y dibujos.

Entre sus muros es posible comprobar que el intrusismo en el ejercicio de la

abogacía también era un problema allá por el siglo XV. Un escrito de 1493 referente al oficio de abogado revela que, en Uclés, ya había personas que, “siendo iletrados”, ejercían la abogacía e impedían ir ahí a los graduados “porque abogando los dichos partistas no ganarán de comer los letrados”. (Imagen 1). Otra orden de 1495 de Francisco Ramírez, secretario real y contador de la orden de Alcántara, para quitar de 3.000 maravedís de los 10.000 que le correspondían anualmente al bachiller Baeza por ejercer como abogado de pobres nos da pistas del salario de lo que entonces era el turno de oficio. (Imagen 2).

Las normativas del Archivo de Simancas rigen y rigieron el funcionamiento de las primeras entidades archivísticas del mundo.

Este fondo documental es parte del Registro de la Memoria de la Humanidad por la Unesco, como continente y contenido. Una denominación que se hace latente nada más cruzar sus puertas originales de enebro, que todavía conservan restos del cuero con el que fueron cubiertas hace más de cinco siglos.

Todos los días, decenas de personas acceden por estas puertas para visitar las salas destinadas a la exposición permanente. También lo hacen investigadores de todo el mundo que buscan conocer pedazos de la historia a partir de las miles de páginas, mapas, escudos, patentes, tratados, testamentos, planos, normativas, convenios, pergaminos, dibujos y un largo etcétera de documentos que viven entre los muros del Castillo de Simancas.

Y es que el archivo simanquino ofrece un servicio de información personalizado de los fondos que conserva y permite a los usuarios localizar de forma libre y gratuita los escritos de su interés a través de tres modalidades: solicitud por correspondencia, búsqueda a través de Internet y consultas en la propia sede. La sala destinada para este último servicio acogió a 527 investigadores en 2023, quienes consultaron más de 7.000 legajos. Otros 882 hicieron sus consultas por correspondencia.

Esta prestación a la sociedad por parte del AGS no sería posible sin las 37 personas que trabajan en él. Desde archiveros, ayudantes facultativos y dirección, hasta el personal administrativo, de mantenimiento, vigilantes, limpieza o mozos de almacén. Todos ellos realizan un trabajo incansable para cumplir con las funciones de información, reproducción, restauración, digitalización y almacenamiento que ofrece la entidad.

La labor del archivero va más allá de la conservación y prestación del servicio. Ellos tienen la importante tarea de transcribir y describir el contenido de cada documento que se encuentra dentro de cada legajo. Uno a uno, van interpretando pedazos de la historia escritas en tinta sobre un papel que lleva consigo siglos de información. Y si el paso de los años ha dejado huella en algún documento, son ellos los que se encargan de restaurarlos, curarlos y crear papel nuevo que cubra los huecos que deja el tiempo.

Lejos queda la imagen de las películas en la que los documentos más importantes del mundo son pergaminos kilométricos que solo se pueden tocar con guantes por señores con bata blanca. En Simancas los miles de legajos se manipulan con el mejor y más delicado guante de todos, las manos.

Por si fuera poco, en el día a día del AGS también hay lugar para una tarea más: la digitalización. En el Portal de Archivos Españoles (PARES) se han subido ya más de 200.000 descripciones archivísticas y más de dos millones de imágenes digitales, cifras que suponen el 15 % del contenido total del fondo. Este arduo trabajo de los archiveros permite a la sociedad acceder a miles de escritos e imágenes desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento.

EL CONTENIDO

El subdirector del Archivo de Simancas, José María Burrieza Mateos, resume la importancia del fondo documental simanquino en una frase: "Todos los países que quieran investigar su edad moderna tienen que venir a Simancas". Y es que, entre sus 13 kilómetros de estanterías, almacenadas en cámaras a la que solo puede acceder personal autorizado, el archivo guarda la documentación producida por los organismos de gobierno de la monarquía hispánica desde la época de los Reyes Católicos hasta la entrada del Régimen Liberal.

Desde su creación, el archivo fue un reflejo de la estructura administrativa del reino

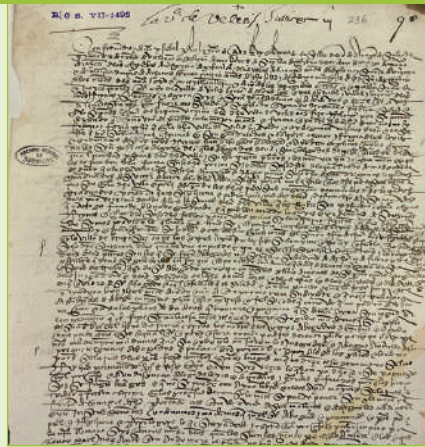


IMAGEN 1. Documento sobre el intrusismo laboral en la abogacía



IMAGEN 2. Salario de abogado de pobres del Consejo de las Órdenes



IMAGEN 3. Testamento de Isabel I la Católica



IMAGEN 4. Plano de Aranda de Duero

IMAGEN 5. Estado de Lanzarote tras las erupciones volcánicas de diciembre de 1730





Parte de la comisión de la revista durante la visita al AGS junto a su subdirector, José María Burrieza



en cada una de las etapas. Así, su organización se puede distinguir en dos bloques documentales: los pertenecientes a la dinastía austríaca (siglos XV-XVII) y los de la dinastía borbónica (siglo XVIII).

Durante la dinastía austríaca, la estructura administrativa estaba constituida por los Consejos, denominados así porque su función principal era aconsejar al monarca. Se crearon tantos Consejos como territorios tenía la monarquía hispánica y cuantas materias tocaba, un total de trece. En esta época la función del archivo era administrativa y estaba destinado a servir a la Corte y a los particulares que solicitaban copia de los documentos conservados.

A este período de la historia está destinada una sala completa de exposición en la que se exhiben documentos como el testamento de Isabel La Católica (imagen 3), papantes de corso, tratados de paz y de independencia e, incluso, un plano de Aranda de Duero, el primero de Europa que fue presentado como prueba en un juicio (imagen 4).

Los Borbones organizaron su estructura administrativa en cinco Secretarías de Despacho que sustituirían a los trece Consejos anteriores y que se pueden considerar como los antecedentes de los actuales ministerios.

De esta época se conservan algunos mapas de las erupciones volcánicas que azotaron la isla de Lanzarote entre septiembre y diciembre de 1730 (imagen 5) o documentos sobre intentos de toma de Gibraltar.

A partir del siglo XIX, con la llegada del nuevo Régimen Liberal, Simancas se abrió a la investigación histórica y de archivo administrativo pasó a ser archivo histórico.

En la actualidad el Archivo está lleno y no recibe más documentación que las obtenidas a través de compras o subastas. Una comisión específica se encarga el estudio de posibles adquisiciones y seguimiento de casos de interés para el fondo documental. En estos casos, el AGS goza del derecho de tanteo, por lo que tiene preferencia de adquirir el bien, en este caso un documento, al mismo precio en que pudiera hacerlo un tercero que estuviese interesado en comprarlo.

EL CONTINENTE

Antes de ser la sede de uno de los archivos más importante del mundo, el Castillo de Simancas fue un lugar de defensa, prisión y hasta banco de España. A diferencia de otras instituciones archivísticas en la que el edificio no es un elemento fundamental, en Simancas,

continente y contenedor son igual de relevantes y han evolucionado de manera simultánea.

Su inicio como conjunto documental está a la vista de todos, en una de las torres que destaca por estar enladrillada. Ahí, en 1540 el emperador Carlos V decidió guardar y custodiar todas las escrituras de su patrimonio. Para 1572 este espacio se había llenado y hubo que replantear la construcción de un edificio destinado íntegramente al almacenamiento de documentos. Fue Felipe II, quien en 1572 encargó a Juan de Herrera la proyección de un edificio orientado a funcionar como órgano archivístico de la monarquía y este presentó en 1578 los planos del primer edificio del mundo construido para ser archivo.

Aunque se conservaron algunos rasgos propios del castillo previo, como el recinto amurallado, los cubos y la capilla, el estilo que primó en esta nueva construcción fue funcional, es decir, el diseño responde a su función archivística. Así, se dividió el espacio teniendo en cuenta los dos cometidos que entonces tenía que cumplir esta entidad: depósito documental y servicio de consultas. En lado izquierdo del castillo se destinó a las consultas y zona de trabajo, mientras que en el derecho se conservaban los documentos, en un espacio con menos ventanas y plantas con más sillares de piedra para evitar la humedad.

Las sucesivas reformas del siglo XX y el actual fueron adaptando el edificio a las nuevas técnicas que surgían, como la reprografía y la restauración. Hoy en día los espacios se han invertido y donde antes se encontraban las salas de consulta, hoy hay siete plantas de depósito documental. En cambio, los antiguos depósitos son ahora las salas de exposiciones, de investigación y trabajo del personal.

Continente y contenido, castillo y archivos, historia y presente. Una palabra no tiene sentido sin la otra. Como tampoco lo tiene la historia sin el registro o sin la memoria. En Simancas lo saben bien, porque en este municipio persiste la memoria de la humanidad, registros de tiempos pasados que hoy son vistos como lejanos, pero que no son tan diferentes al actual. Y es que para viajar al pasado no hacen falta muchas máquinas ni tecnología, solo una vuelta por el Archivo. ■

DATOS RELEVANTES

LAS CIFRAS

- ▶ 13 km lineales de documentación
- ▶ 75.000 legajos
- ▶ 37 empleados y 15 técnicos de archivo
- ▶ 211.556 descripciones archivísticas publicadas en el Portal de Archivos Españoles (PARES)
- ▶ 2.723.867 imágenes digitales publicadas en PARES
- ▶ 2.100 hojas y 27 pergaminos restaurados
- ▶ 25.157 visitantes en 2023
- ▶ 527 visitas de investigadores en 2023

- ▶ 7.095 peticiones de consultas de documentos en sala de consulta
- ▶ 882 usuarios por correspondencia

VISITAS

- ▶ Visitas libres de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.
- ▶ Visitas guiadas para grupos de entre 5 y 30/45 personas de lunes a viernes previa solicitud.
- ▶ Más información en la web:
<https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/exposiciones-actividades/visitas-ags.html>

Fotograma de la película *Le Juge Fayard dit 'Le Shériff'*, de Yves Boisset

Le Juge Fayard dit 'Le Shériff'

Yvess Boisset, 1977

Por Miguel Ángel Martín Maestro,
magistrado

Entre los aciertos de la película, su director, Yves Boisset, un clásico del "polar" francés (suyas son *El atentado*, *Espion*, *lève-toi*, *Série noire*, *Un condé*, por citar las más conocidas), y la presencia de Patrick Dewaere en el papel del juez Fayard, suplantación del verdadero François Renaud, magistrado asesinado el 3 de julio de 1975 por sus intentos de investigación para desarticular el clan de los lyonnais y sus ramificaciones políticas, algo que provocó problemas de rodaje y censura previa de la película y eliminación de diálogos y nombres. La presencia de Dewaere en cualquiera de sus películas dota a sus personajes de esa mirada de desamparo e inseguridad que sobrellevaba con su carácter pendenciero y violento. Tan es así que, por diferencias en el rodaje, Dewaere retó a Boisset a una pelea que el director aceptó como única manera de ser obedecido. No se cuenta quién recibió más golpes, pero sí que Dewaere a partir de ese momento siguió las instrucciones recibidas.

La fragilidad, o el sentimentalismo de una persona, muchas veces se camufla con la tenacidad en el trabajo. Para el juez

Fayard no soltar la presa arrinconada es esencial, su debilidad interna queda anulada por el sentido del deber. Cuando los superiores le cercenan la posibilidad de investigar la corrupción empresarial busca nuevas vías para intentar llegar al fin último, por muy nerviosos que queden los superiores. El carácter del juez de instrucción y la colaboración de un inspector de policía (Philippe Leotard) suplen y eliminan todas las trabas legales, ilegales y morales que la trama pone en su camino. Como le pasó al verdadero juez Renaud, el juez Fayard solo puede ser interrumpido de una única manera, y ese plano final de la inauguración de la nueva fábrica del empresario corrupto y corruptor (Michel Auclair), acompañado

La verdad es un objetivo legítimo en el ejercicio de la jurisdicción, pero no a cualquier precio

por todas las fuerzas vivas de la ciudad (Aix en Provence) incluido el procurador general (Jean Bouysse), deja a las claras que hay una ley para el común y una ley, o ninguna, para el poderoso.

El juez Fayard no actúa por ambición, ni por ignorancia a la ley. Le pueden los impulsos y el convencimiento último de tener razón porque ante todo ha de primar la verdad. Y la verdad es un objetivo legítimo en el ejercicio de la jurisdicción, pero no a cualquier precio. El omnímodo poder del juez de instrucción provoca en Fayard un exceso de celo, un abandono de la ley que proclama por el fin superior de alcanzar la verdad y obtener pruebas incriminatorias. Confirmado en el cargo, pero reprendido, el avance de la investigación reaviva sus impulsos y sus excesos instructores, las reconvencciones que recibe le sirven de estímulo para seguir adelante en vez de reflexionar si el aviso afecta a su propia seguridad o solo a su carrera profesional. Cuando puede darse cuenta de que su cartera contiene información demasiado valiosa como para que esté en poder de un simple juez de trinchera, será demasiado tarde. ■

ENTREVISTA

EMILIO VEGA

EX JUEZ DECANO DE VALLADOLID Y EX TITULAR DEL JUZGADO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

“La dilación de los plazos es frustrante para los ciudadanos y el sistema no debería permitirlo”



Emilio Vega, a la puerta de los juzgados de la calle Angustias

Por Elisa Campillo,
periodista

Tras más de una década trabajando en diversos juzgados de toda España, Emilio Vega volvió a su casa, a Valladolid, en el año 2009 para hacerse cargo del Juzgado de Violencia contra la Mujer. Por dos veces, en 2018 y 2022, fue elegido juez decano de Valladolid, lo que le ha permitido obtener un conocimiento muy transversal acerca del día a día de la justicia. Con nuevo destino en la Audiencia Provincial de León desde hace unos meses, reconoce que nunca en su carrera ha ido a trabajar de mala gana y se muestra siempre muy agradecido a las personas que trabajan con él. Especialmente en un juzgado tan específico pero con tantas aristas como el de violencia de género, que se complementa con materia civil en divorcios y separaciones de bienes, considera fundamental una buena coordinación.

Pregunta.— Cuando uno instruye un caso debe escuchar ciertas realidades complicadas, a veces impactantes. ¿Es fácil luego irse a casa y abstraerse?

Respuesta.— Hay asuntos realmente impactantes. De lo que uno se sorprende es de cómo puede haber personas que puedan llegar a hacer las cosas que hacen. Justificación nunca la hay, pero intentas entenderlo y al final te das cuenta de que la única explicación a veces es la maldad. Pero los problemas que más habitualmente te llevas a casa no son tanto de asuntos penales, porque el Derecho Penal es un derecho represor, está hecho para castigar al que comete un delito y no va mucho más allá. Sin embargo, el Derecho de Familia sí que es un derecho para corregir, es más constructivo. La sentencia de divorcio es un proyecto de futuro: tú les dices a ellos cómo van a vivir a partir de ese momento. Y a veces ese proyecto no funciona y eso sí que te lo llevas a casa: cómo puedo hacer que esto funcione, pese

a la actitud que tiene el padre, la madre, el niño que ya es adolescente...

P.— ¿Cómo puede la sociedad ser más efectiva contra la violencia de género?

R.— A nivel mediático se ha puesto mucho el foco en el castigo, pero la Ley de Violencia de Género tiene cuatro capítulos y el más corto es precisamente el de la cuestión sancionadora. La violencia de género no surge porque uno de repente quiera ser violento, salvo cuestiones patológicas. La violencia es el sistema más antiguo de resolver conflictos, es la incapacidad de resolverlos de manera pacífica. Y cuando es de género, es porque además consideras que la mujer es inferior a ti y eres violento para imponerte a ella. ¿Cómo se consigue evitar? Con educación, no hay otra manera.

P.— ¿En qué momento de la carrera de Derecho se dio cuenta de que quería ser juez?

R.— Al final. Yo no soy vocacional. Terminé la carrera y no tenía ningún apoyo para



Emilio Vega, en la planta superior de la sede de Angustias, donde se encuentra el Juzgado de Violencia contra la Mujer

ejercer por mi cuenta, y en ese momento las oposiciones posibles eran jueces, fiscales y secretarios. Me presenté a las tres y aprobé la de jueces y la de secretarios. Yo lo que quería era trabajar y ser independiente. Pero luego es una profesión que me gusta, es muy atractiva. Y me ha parecido siempre muy útil, que podía aportar algo a la sociedad.

P.— ¿Ha llevado casos mediáticos?

R.— Algunos lo eran por el tipo de asuntos que trataban, como homicidios. Afortunadamente, en los 15 años en los que he estado aquí no hemos tenido muchos, salvo en los últimos dos o tres años. Yo siempre me he rebelado por el hecho de que mediáticamente no cuenta lo que haces día a día, lo que cuenta es el homicidio. No quiero quitarle ni un ápice de gravedad, pero cuando se valora la Ley de Violencia de Género solo se hace en atención a cuántas muertes hay. Y para mí es un error, porque en los años que he estado aquí hemos resuelto más de 7.000 órdenes de protección, hemos llevado al juzgado de lo Penal más de 12.000 asuntos... Esos son los datos reales. No se habla de la mujer a la que hoy se le ha dado una orden de protección, se le ha regulado la situación de los niños, se le han fijado pensiones, se le ha resuelto en menos de 24 horas una situación que para ella era muy costosa de llevar. Evitar un homicidio es muy difícil, no tenemos una bola de cristal, y a veces sí que te exigen un poco eso.

P.— ¿Siente esa presión?

R.— Con la información que tú tienes por la mañana no puedes prever que por la tarde vaya a haber un homicidio, pero si deniegas una orden de protección y ocurre, sé que el primero al que van a pedir explicaciones es a mí. Pero yo siempre he tenido muy claro que el día que tenga tanto miedo que adopte una medida cautelar restrictiva de derechos, como una orden de protección, para cubrirme mis espaldas, ese día me iré del juzgado. ¡Y no me he ido por eso!

P.— Cuando hay un caso muy mediático se publican detalles, hay tertulias, se crea un juicio paralelo en la sociedad. Parece que una parte tiene muy claro quién es el culpable y por qué lo ha hecho...

R.— Claro que hay una presión mediática, pero luego está la profesionalidad. Cuando dictas una sentencia no lo haces porque te ha venido una inspiración divina, lo declaras a través de una prueba con arreglo a unos criterios legales establecidos judicialmente. Y a veces, por mucho convencimiento que tengas tú de que un hecho ha ocurrido, si no tienes pruebas no lo puedes tener por probado. En esos juicios paralelos muchas veces desconocen toda la información.

P.— ¿Cómo afrontamos la dilación de los plazos en la justicia? Para el ciudadano su asunto es lo más importante, y eso de tener que esperar tanto...

R.— Eso es frustrante para los ciudadanos y el sistema no debería permitirlo. El problema no es que los jueces no hagan su trabajo, sino que los juzgados están sobrecargados. Si un juzgado fija un juicio para dentro de año y medio es porque verdaderamente no hay un hueco antes. La organización judicial española es absolutamente decimonónica y necesita una reforma. Si acabamos con los juzgados estancos y hacemos los tribunales de instancia, si luego necesitas un juez más puedes crear solamente la plaza de juez, y si necesitas siete funcionarios más puedes crear esas siete plazas sin necesidad de crear un juzgado entero. Los medios serían más eficientes y estarían más adaptados a las necesidades reales. Todos los ministros, cuando entran, dicen que van a hacerlo, pero luego ninguno se atreve.

P.— ¿Qué le supuso ser juez decano?

R.— Tuve la mala suerte de que al año de tomar posesión estalló el COVID. Había que

reorganizar todo el servicio y no había antecedentes de nada. Fue un tiempo de mucho trabajo, pero hubo mucha colaboración tanto con el Colegio de Abogados como con el de Procuradores. Javier Garicano y yo promovimos el primer protocolo de juicios telemáticos que se hizo en España, que luego nos copiaron todos, hasta el Consejo. Fue un trabajo ingente, recuerdo que cuando había un positivo en el juzgado se cerraban todas las instalaciones, se desinfectaban... También regular el acceso a los edificios judiciales cuando se fueron levantando las restricciones era muy novedoso, y a veces nos sentimos un poco incomprendidos porque algunos querían volver a la situación anterior y no era fácil.

P.— ¿Pero el balance es bueno?

R.— Sí. El decanato es una experiencia, te enteras de todo. Pero fue bonito, además me eligieron dos veces los compañeros y eso es muy gratificante. Es el único cargo judicial, junto con las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, que realmente es democrático.

P.— ¿Cree que llegaremos a ver la Ciudad de la Justicia?

R.— ¡Espero que sí, no vamos a ser pájaros de mal agüero! Pero no sé cuándo. Es importantísimo, porque ahora mismo no hay en Valladolid ni un solo hueco para instalar un juzgado más en las dependencias judiciales que tenemos. Si se crea alguna unidad más, hay que ir a buscar pisos de alquiler. Y eso es un problema, porque eso lo tiene en cuenta el Ministerio a la hora de crear unidades judiciales. La Ciudad de la Justicia es muy importante, porque si no va a ser muy difícil instaurar los tribunales de instancia y las oficinas judiciales nuevas. Ya no es por la comodidad y que sea bonito, es que va a ser la capacidad de que la justicia en Valladolid crezca. ■



FOTO: PEXELS

La **responsabilidad** de la **Administración** por los daños causados por las **vacunas**

A propósito de la sentencia 293/2024, de 3 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

*Por Carmen Castro Manzanares,
abogada*

La reciente sentencia n.º 293, del Tribunal Superior de Extremadura de 3 de mayo de 2024, dictada en el recurso 75/2024, devuelve a la primera línea de la actualidad jurídica una cuestión de enorme interés: la posible responsabilidad patrimonial de la Administración en los casos en los que personas vacunadas en el seno de campañas de vacunación promovidas por la propia Administración sufran secuelas derivadas de dicha vacunación.

El caso analizado por esta sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Extremadura frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Cáceres, en virtud de la cual se estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo promovido por

la persona administrada (en el que esta pretendía que la Administración le indemnizase por la secuelas y dolencias padecidas tras la inoculación de la vacuna Janssen contra el COVID-19), y se condenó a la Administración a que indemnizara a la persona recurrente

El TSJ declaró que la **complejidad de la vida actual motiva que deban autorizarse actividades que acarreen un riesgo de daños muy superiores al normal**

con la cantidad de 40.000 euros, más los intereses legales desde que se interpuso la reclamación en vía administrativa.

En su recurso de apelación, la Junta de Extremadura sostuvo que la Administración pública no es una aseguradora universal y que no se había vulnerado la *lex artis ad hoc*, que es lo que habría hecho surgir la responsabilidad patrimonial de la Administración: lo relevante no era el resultado, sino que la Administración prestase la atención médica correcta, pues ni a la Administración ni a la ciencia le resulta posible garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. En consecuencia, la Administración consideraba que no se producía un daño antijurídico, aunque no se lograra el restablecimiento de la salud o del resultado

EL MARCO NORMATIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El punto de partida es la Constitución Española, cuyo artículo 106.2 declara que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Sobre esa base, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contienen la normativa básica relativa a los principios reguladores y al procedimiento aplicable, respectivamente.

Así, el artículo 32.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios

públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. En este precepto se contienen, pues, los tres requisitos fundamentales para que surja esta responsabilidad: (I) ha de producirse un daño, (II) este debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (quedando excluidos los supuestos de fuerza mayor), de manera que se exige una relación de causalidad entre la conducta administrativa y el daño que se alega; y (III) debe ser un daño antijurídico, es decir, que el particular no tenga el deber jurídico de soportar (si existe el deber jurídico de soportar el daño, decae la obligación de indemnizar, véanse las SSTs de 28 de marzo de 2014 y 25 de abril de 2017, entre otras muchas). Además, la lesión por la que se origina el daño ha de ser efectiva, evaluable económicamente e individualizada en relación a una persona o grupo de personas (artículo 32. 2 Ley 40/2015, de 1 de octubre).

La doctrina (Martín Rebollo) ha establecido además que se refiere a toda actividad administrativa, ya sea jurídica o fáctica, y ya sea por acción o por omisión, y que dicha responsabilidad se configura como objetiva y directa (no únicamente subsidiaria). La jurisprudencia, por su parte, ha matizado por ejemplo que, respecto al nexo causal, cabe la concurrencia de culpas, que llevaría a la moderación del quantum indemnizatorio.

deseado, porque no se había acreditado que la recurrente hubiera sufrido una mala praxis médica. Además, la Administración también cuestionó la relación de causalidad entre la inoculación de la vacuna y daño sufrido, habida cuenta de los antecedentes familiares del paciente y de que su ingreso con cuadro de isquemia se produjo casi dos meses después de la vacunación.

La parte apelada se opuso al recurso basándose, en esencia, en las conclusiones de la interesantísima sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2012, dictada en el recurso de casación n.º 6878/2010, en la que el Alto Tribunal analizó un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños sufridos por una persona a la que, tras serle administrada la vacuna de la gripe, se le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré (un trastorno neurológico grave, poco frecuente, en el que el sistema inmunitario ataca las neuronas y nervios, llegando a causar parálisis). En el caso enjuiciado por el Tribunal Supremo, al afectado se le reconoció una grave disminución funcional del 85 % y se le concedió la invalidez absoluta.

El Tribunal Supremo descartó, en primer lugar, que hubiera habido una mala praxis consecuencia de la infracción del deber de información a los efectos de conocer los riesgos y posibles consecuencias de la vacunación, ya que se consideró que “el deber de información no puede entenderse genérico o en términos de probabilidad hipotética, ni ampara la exigencia de la información excesiva y desproporcionada con las finalidades curativas o preventivas de la ciencia médica”, ya que “la información no puede ser ilimitada o excesiva, so pena de producir el efecto contrario, atemorizante o inhibitor”. Y, en relación con si el recurrente estaba o no obligado a soportar el daño que padecía, el Alto Tribunal concluyó que “la obligación

La sentencia reconoció que la Administración recomendó la vacunación en beneficio particular pero, sobre todo, por el beneficio colectivo

de soportar el daño sufrido no puede imputarse al perjudicado cuando este no tiene el deber jurídico de soportar el riesgo que objetivamente debe asumir la sociedad en virtud del principio de solidaridad”. Así, se concretó en el reclamante “un riesgo altamente infrecuente, pero de previsible aparición en el amplio ámbito de las campañas generales de vacunación [...] para la disminución de la incidencia o erradicación de enfermedades que, como la gripe, puede ser una enfermedad muy grave cuando se extiende de forma genérica a una población numerosa, con complicaciones también muy graves y fuerte absentismo laboral”. Por todo ello, el Tribunal Supremo determinó que nos encontrábamos ante una carga social que el reclamante no tenía “el deber jurídico de soportar de manera individual, sino que ha de ser compartida por el conjunto de la sociedad, pues así lo impone la conciencia social y la justa distribución de los muchos beneficios y los aleatorios perjuicios que dimanar de la programación de las campañas de vacunación dirigidas a toda la población, [...] de las que se beneficia en su conjunto la sociedad”.

El Tribunal Superior de Extremadura, siguiendo los principios que se acaban de exponer, comenzó indicando que “La complejidad de la vida actual motiva que en muchas ocasiones deban autorizarse actividades que acarreen un riesgo de daños muy superiores al normal, pero sin los cuales el funcionamiento adecuado de la economía y de la sociedad

no sería posible, lo que ha llevado a formular el principio de que quien crea un riesgo está obligado a reparar los daños causados por la creación del mismo”. Dicho esto, estimó que el daño sufrido por la persona recurrente resultaba “de un funcionamiento normal derivado de la complicada situación de una gran mortandad por una pandemia”, y reconoció que, aunque la vacunación no se configuró como obligatoria, la Administración “aconsejó de una manera un tanto forzada a la población” que se vacunase, “en beneficio particular pero sobre todo y a la vista de los efectos que producen en la colectividad [...] y también en atención a la función que desempeña y tutela la Administración, y con resultados muy graves en caso de no tomar medidas”.

La sentencia, en fin, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Extremadura y consideró que el Juzgado había valorado correctamente el denominado principio de solidaridad, “teniendo en cuenta que el título de imputación de la Administración, en el que participa activamente a través de la conducta administrativa, es la salvaguarda de los intereses públicos, en este caso, el contagio que, indudablemente, afectaba a la sanidad pública, intereses generales que, en muchas ocasiones, producen daños colaterales y que han dado lugar a que se establezca una responsabilidad por riesgo en quien pone en funcionamiento el mismo”, y concluyó que “si ahora no se atendiera a quienes se han visto singularmente perjudicados a consecuencia de esta actividad individual y de trascendencia colectiva se rompería el principio de igualdad en el levantamiento de las cargas o de los peligros que acechan a la sociedad”.

En el momento de escribir estas líneas queda por ver si la sentencia es recurrida en casación por la Administración y, en tal caso, qué dice el Tribunal Supremo. Estaremos atentos. ■



FOTO: FREEPICK

Prohibido orientar sobre honorarios

Un escenario de inseguridad jurídica con visos de solucionarse con la futura Ley Orgánica del Derecho a la Defensa

*Por José María Díez Segoviano,
abogado*

Para iniciar la historia de cómo los colegios de la abogacía han perdido su competencia original de orientación en relación a los honorarios, hemos de partir de las denuncias al Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) que se hicieron ante el Servicio de la Competencia, en el año 2012, por la publicación en la página web del mismo de los

criterios de honorarios, por entender que dicha práctica constituía una de las prohibidas por los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), al considerarse una conducta restrictiva de la competencia. A dicha prohibición, además, hay que añadir la que contempla la ley 2/1974 de 13 de febrero de Colegios Profesionales, a través de la reforma operada en la misma por ley 25/2009, estableciendo una rotunda prohibición a que los colegios establezcan

baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales.

Este procedimiento terminó de forma convencional ante el Tribunal de la Competencia, en diciembre del año 2013, asumiendo el CACYL los siguientes compromisos: 1) Suprimir de la página web del CACYL los criterios orientativos de honorarios de Castilla y León. 2) No publicar en el futuro en la página web del CACYL cualquier clase de baremos de honorarios, criterios orientativos de los mismos o criterios de valoración a efectos de tasaciones de costas o reclamaciones judiciales de honorarios que, de alguna forma, impliquen una cortapisa, directa o indirecta, al libre establecimiento de honorarios por parte de los abogados a sus clientes. 3) Eliminar de la página web del CACYL que entre las funciones del mismo se encontraba la de fomentar criterios orientadores de honorarios profesionales aplicables por todos los colegios de Castilla y León. 4) Modificar el apartado d) del artículo 22 del Estatutos del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, sustituyendo "honorarios" por "criterios de valoración".

En el año 2013 fue el Colegio de la abogacía de Valladolid el que resultó denunciado y en los mismos términos utilizados frente al CACYL, finalizando por ello con asunción de compromisos prácticamente idénticos a los anteriores: la no publicación de referencia alguna a criterios de valoración en materia de tasación de costas y jura de cuentas ni adopción de medidas que pudieran derivar en recomendaciones, baremos o valoración de los servicios profesionales de sus colegiados.

SANCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y LA COMPETENCIA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado a numerosos colegios por vulnerar el artículo 1 de la LDC; entre otros, al Colegio de Abogados de Barcelona con 620.000 €, al de Sevilla con 145.000 €, al de Vizcaya con 125.000 €, al de la Rioja con 90.000 €, o al Colegio de Abogados de Ávila con 10.000 €. La sanción a este último todavía está pendiente de ser resuelta por la Audiencia Nacional, al reconocer el Tribunal Supremo la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para imponer la sanción.

CRITERIOS ORIENTADORES SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO

Fueron las sentencias de la Sala 3ª del TS de fechas 19 y 23 de diciembre de 2022 las que finalmente concretaron los argumentos para determinar qué debe entenderse por “criterios orientadores en la tasación de costas”. Para su análisis, hay que partir del artículo 14 de la Ley 2/1974 de 13 de diciembre sobre Colegios Profesionales, en la redacción dada por la 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio —más conocida como Ley ómnibus— que recoge la prohibición de recomendaciones sobre honorarios: “Los colegios profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o reglas sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la disposición adicional 4.ª; dicha disposición adicional por tanto, recoge la excepción a la regla general de prohibición: “Los colegios profesionales podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y jura de cuentas de abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que correspondan a los efectos de tasaciones de costas en asistencia jurídica gratuita.” Por lo que la regla general de prohibición de baremos se exceptiona para el caso en que los mismos se apliquen en procedimientos o asuntos en los que intervengan

los juzgados para su fijación o en los que el obligado a pagar no sea el cliente que haya elegido libremente al profesional que minuta.

En esos casos, debemos entender por criterios orientativos la formulación de pautas o directrices con algún grado de generalidad, excluyéndose así el señalamiento de precios o cifras determinadas, e igualmente, el establecimiento de reglas pormenorizadas referidas a actuaciones propias concretas y que conduzcan directamente a una determinada cuantificación de honorarios; en consecuencia, la existencia de baremos, es decir, listados de precios para cada una de las actuaciones de los abogados afectaría a la libre competencia en el mercado de los servicios profesionales, ya que tiende a homogenizar los honorarios a la hora de tasar costas.

La existencia de baremos, es decir, listados de precios para cada una de las actuaciones de los abogados afectaría a la libre competencia en el mercado de los servicios profesionales

Por tanto, debemos entender por criterios orientativos la formulación de pautas o directrices con algún grado de generalidad, excluyéndose así el señalamiento de precios o cifras determinadas, e igualmente, el establecimiento de reglas pormenorizadas referidas a actuaciones propias concretas y que conduzcan directamente a una determinada cuantificación de honorarios; en consecuencia, la existencia de baremos, es decir, listados de precios para cada una de las actuaciones de los abogados, afectaría a la libre competencia en el mercado de los servicios profesionales, ya que tiende a homogenizar los honorarios a la hora de tasar costas.

En relación a la interpretación de lo establecido en el artículo 14 y la disposición

adicional cuarta de la ley 2/1997 de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, según la redacción dada por la ley 25/2009 de 22 de diciembre, hay que indicar que como regla general, no puede haber baremos ni catálogos o indicaciones concretas que conduzcan directamente a la cuantificación de los honorarios de los abogados; sin embargo, se establece como excepción que sí puede haber criterios a los solos efectos de tasación de costas, de la jura de cuentas de los abogados y en los casos de asistencia jurídica gratuita, siempre que no se establezcan reglas específicas y pormenorizadas a actuaciones profesionales concretas que fijen una determinada cantidad de los honorarios.

Visto lo manifestado anteriormente se ha generado un panorama de inseguridad e incertidumbre en materia de honorarios, provocando una situación complicada tanto para el CACYL como para los colegios de abogados. Los colegios siguen teniendo la obligación legal de resolver si los honorarios que los tribunales les dirigen son o no excesivos, pero no hay ya criterios de valoración; se debe de partir para su fijación de diversas pautas, entre otras, la cuantía, la complejidad, el número de intervinientes, la fase del proceso, la repercusión para las partes, los precios de mercado habituales en la prestación de los servicios profesionales minutados por dicho procedimiento, pretensiones deducidas en relación con la trascendencia del interés debatido en el procedimiento o el tiempo medio de dedicación.

Sin embargo, una luz aparece en el horizonte legislativo; el 26 de junio pasado fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, que incluye una enmienda transaccional, a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), por la que se permitirá elaborar y publicar, a los solos efectos de las tasaciones de costas, los hasta ahora proscritos criterios orientativos.

La pelota de la seguridad jurídica está ahora en el tejado del Legislativo; confiemos en que cumpla su cometido y función lo más rápido posible. ■



www.grupo-anton.com

Teléfono:
900 308 888

Síguenos:



@Grupo_Anton

A la vanguardia en servicios de limpieza y desinfección



- ✓ HIGIENIZACIÓN Y LIMPIEZA
- ✓ LIMPIEZAS TÉCNICAS
- ✓ MANTENIMIENTO
- ✓ JARDINERÍA
- ✓ MULTISERVICIOS
- ✓ SERVICIOS AUXILIARES
- ✓ GESTIÓN INTEGRAL

Comisiones

Comisión del Turno de Oficio

UNA NUEVA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Las VIII Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita celebradas en Valladolid los días 18 y 19 de abril fueron un rotundo éxito.

Con una asistencia de 200 profesionales de toda España resulta grato indicar que la práctica totalidad de los inscritos participaron de una forma bastante activa en las ocho mesas que ofrecía el programa.

Bajo el lema 'La nueva ley, una urgente necesidad' los ponentes expusieron las pautas y propusieron sus acertadas conclusiones para que sean atendidas en la futura normativa, que deberá regular no solo el beneficio de la justicia gratuita, sino la dignidad y reconocimiento del turno de oficio que desempeñamos los profesionales.

Hay que destacar la gran labor desarrollada por los compañeros del ICAVA, que como se tuvo ocasión de agradecer en el propio congreso, estuvieron comprometidos tanto por el día como por la noche en la perfecta y correcta organización de las jornadas.

La elaboración de la futura ley deberá contar con la participación de la abogacía, por supuesto, exigiendo la unificación de los diferentes criterios de aplicación en la concesión del derecho y el establecimiento del marco adecuado en la prestación del turno de oficio, reconociendo, protegiendo y remunerando como nos merecemos a los profesionales que prestamos este servicio.

Sección de Penitenciario

CURSO OBLIGATORIO ANUAL PARA EL TURNO DE OFICIO DE DERECHO PENITENCIARIO CELEBRADO EN MAYO DE 2024

Los días 16 y 17 de mayo de 2024 se realizó en el ICAVA el curso anual de derecho penitenciario, obligatorio para todos los profesionales que están en el turno de derecho penitenciario y también para quien pretenda incorporarse al mismo.

En las ponencias del jueves 16 de mayo —impartidas por un compañero y una compañera de nuestro Colegio de forma brillante— se trataron los temas de la progresión del segundo al tercer grado penitenciario y la libertad condicional, temas estrictamente penitenciarios en los que tuvimos ocasión de profundizar, con aportaciones muy interesantes.

Las ponencias del viernes 17 de mayo estuvieron a cargo de un compañero de Madrid y una compañera de Sevilla. Trataron

de un tema que, si bien no deja de ser plenamente penitenciario, también contiene un fuerte contenido de derecho laboral, por lo que se han organizado por el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciario en colaboración con la Agrupación de Derecho Laboral del ICAVA, cuyo resultado ha sido muy satisfactorio. Concretamente tuvimos la oportunidad de analizar el derecho al trabajo dentro de la prisión y también de actualizarnos en la más reciente doctrina establecida por el Tribunal Supremo referida a la indemnización a la persona trabajadora dentro de prisión por cese no justificado en el puesto de trabajo, estableciendo como cantidad a abonar el salario dejado de percibir durante el tiempo durante el que se le apartó del trabajo.

Comisión de Mediación

LA MEDIACIÓN COMO REQUISITO DE ADMISIÓN DE DEMANDAS CIVILES

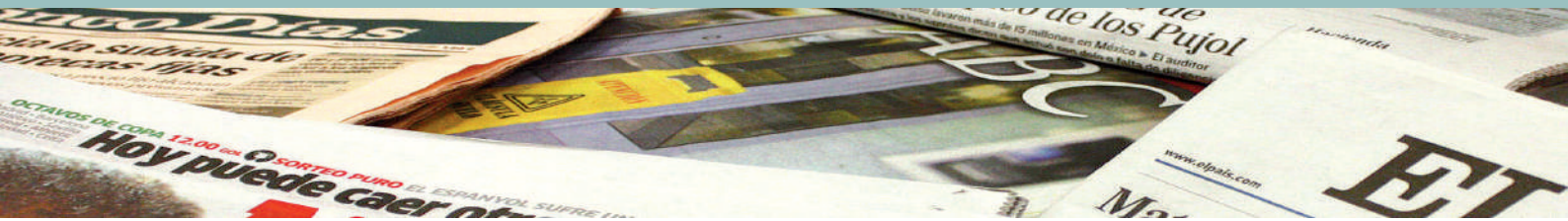
El Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, aprobado el pasado 12 de marzo de 2024 por el Consejo de Ministros, pretende establecer como requisito de admisión de las demandas, en el ámbito civil y mercantil, que se acredite en las mismas que se ha llevado a cabo un proceso de negociación previa.

Si el medio de solución de controversias al que el proyecto confiere mayor relevancia es la mediación, ¿a qué obedece que la

nueva ley orgánica no entre en vigor hasta que no se apruebe un Estatuto de Tercero Neutral para todos los MASC —medios alternativos de solución de conflictos— cuando ya tenemos un Estatuto de Tercero Neutral recogido en la Ley 5/2012?

Confiemos en que este nuevo proyecto no decaiga como lo hizo la Ley de Impulso de la Mediación y, aprovechemos el tiempo que va a transcurrir hasta su aprobación para revisar nuestros protocolos de formación, de calidad y de buenas prácticas.

¿Puede que este sea el momento que buscábamos los mediadores!



El Colegio en la prensa

TURNO DE OFICIO

Europa Press

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en el ICABA llegan por primera vez al millar.

El Mundo

Récord de casos por violencia de género en el turno de oficio de Valladolid.

RTV CYL

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en Valladolid alcanzan el millar por primera vez.

Onda Cero

La paralización de la justicia en 2023 por las huelgas provocó que el turno de oficio tuviera un descenso del 4 %.

Cadena SER

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en el ICABA se dispararon un 31 % en Valladolid en 2023.

COPE

Los abogados de oficio del ICABA atendieron un millar de casos de violencia de género en 2023.

ElDerecho.com

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en el ICABA alcanzan por primera vez el millar.

El Confidencial Digital

Las peticiones de justicia gratuita por violencia de género se disparan en Valladolid.

IUSTEL

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en el ICABA llegan por primera vez al millar.

El Español – Noticias CYL

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia de género en Valladolid se disparan durante 2023.

Tribuna Valladolid

Récord de casos por violencia de género en 2023 en Valladolid, casi un millar con un crecimiento del 31,1 %.

ElDiario.es

Las solicitudes de justicia gratuita por violencia machista crecen un 31 % en Valladolid.

JORNADAS CGAE

El Español – Noticias CYL

La abogacía española sienta en Valladolid las bases de la futura Ley de Asistencia Gratuita: "Es la tormenta perfecta".

Vive Radio

La Abogacía celebra con cerca de 200 letrados de toda España unas jornadas sobre Justicia Gratuita en Valladolid.

CONVENIO FUNDACIÓN LA MERCED

Europa Press

El ICABA asistirá de manera altruista a migrantes vulnerables en la determinación de la minoría de edad.

ElDerecho.com

Abogados del ICABA asistirán a migrantes vulnerables en procedimientos de determinación de la minoría de edad.

El Mundo - Diario de Valladolid

Abogados de Valladolid asistirán gratis a menores migrantes vulnerables.

ElDiario.es

El Colegio de Abogados de Valladolid asistirá de manera altruista a migrantes en procedimientos de determinación de la minoría de edad.

Gente en Valladolid

El ICABA asistirá de manera altruista a migrantes vulnerables en procedimientos de determinación de la minoría de edad.

Pueblos y Comarcas

Los abogados del ICABA asistirán de manera altruista a migrantes vulnerables en procedimientos de determinación de la minoría de edad.

CONVENIO MEDIACIÓN DIPUTACIÓN

El Día de Valladolid

No tires basura en mi patio y no hago ruido en mi peña.

HUELGAS JUDICIALES

El Día de Valladolid

Las huelgas provocan el mayor atasco judicial de la historia.

DÍA DEL ABOGADO

El Español – Noticias CYL

Los abogados levantan la voz tras un año "horrible": "Se ha perdido el respeto a los poderes del Estado".

El Mundo
Diario de Valladolid

Los casos de violencia de género copan el turno de oficio al subir un 31%

Los asuntos de violencia de género alcanzaron su récord en 2023 al llegar a los 999, pese a la bajada total en el número de expedientes con 7157, un 3,9% menos que en 2022.

EL TURNO DE OFICIO

Los abogados de oficio del ICABA atendieron un millar de casos de violencia de género en 2023, lo que supone un aumento del 31,1% respecto al año anterior. Este dato refleja la creciente demanda de asistencia jurídica gratuita en este tipo de casos, que se han convertido en uno de los más frecuentes en el turno de oficio.

EL TURNO DE OFICIO

El ICABA ha atendido un total de 1.000 casos de violencia de género en 2023, lo que supone un aumento del 31,1% respecto al año anterior. Este dato refleja la creciente demanda de asistencia jurídica gratuita en este tipo de casos, que se han convertido en uno de los más frecuentes en el turno de oficio.

Europa press

El ICABA asistirá de manera altruista a migrantes vulnerables en la determinación de la minoría de edad

El ICABA asistirá de manera altruista a migrantes vulnerables en la determinación de la minoría de edad.

El Día de Valladolid

NO TIRES BASURA EN MI PATIO Y NO HAGO RUIDO EN MI PEÑA

El Colegio de Abogados y la Diputación han medido en su conflicto, entre muchos otros, para avanzar que acudan a los juzgados solo por lo que les corresponde en los procedimientos.

El Español

Los abogados levantan la voz tras un año "horrible": "Se ha perdido el respeto a los poderes del Estado"

Javier Martín, decano del ICABA y secretario general del CGAE, atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León



Sede en Luxemburgo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Independencia de los jueces o independencia del Judicial

Una distinción necesaria ante el avance del populismo constitucional

Por M.^a Luisa Escalada López,
Profesora titular de Derecho Procesal, UVA

I. INTRODUCCIÓN

Es por todos sabido que la Unión Europea se fundamenta axiológicamente en el respeto al Estado de derecho y a los principios democráticos, basamento también común en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros (art. 2 del Tratado de la Unión Europea —TUE—) y condición ineludible para la incorporación y permanencia de un Estado europeo en su seno.

Partiendo de estos presupuestos, la idiosincrasia estructural de la Unión conlleva la aplicación descentralizada de su derecho y el establecimiento de un sistema disperso de protección jurisdiccional que converge, no obstante, en el respeto a la tutela judicial efectiva, principio general

reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). De este modo, los Estados miembros están obligados a diseñar un sistema jurídico que la garantice en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

A este respecto, y a efectos de esta titución, es indudable que la independencia de los tribunales es un requisito imprescindible para hacerla posible; sin embargo, en los últimos tiempos hemos asistido a un viraje importante en la jurisprudencia relativa a su contorno y extensión, cuyo punto de inflexión se encuentra en la STJUE de 27 de febrero de 2018, Asunto C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes portugueses*.

II. LA INDEPENDENCIA EXTERNA E INTERNA DE LOS JUECES

La jurisprudencia del TJUE siempre ha contemplado la independencia desde una doble perspectiva, externa e interna.

La primera, atinente al punto de vista estático y previo al proceso, se refiere a la protección del órgano frente a injerencias exógenas, resulta instrumentalmente garantizada por la inamovilidad y se concreta en el concepto de independencia *stricto sensu*.

La segunda, relativa al aspecto funcional de la garantía, es operativa en el momento dinámico-procesal, se identifica con el concepto de imparcialidad y supone que el único interés del juez para la resolución del litigio ha de ser el de la rigurosa aplicación de la norma jurídica.

Ambos conceptos, independencia e imparcialidad, exigen la previsión y el cumplimiento de reglas relativas a la composición del órgano y al estatuto de sus integrantes, de modo que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta tanto a la impermeabilidad del tribunal frente a elementos externos como a su objetividad respecto a los intereses en litigio.

III. LA INDEPENDENCIA DEL JUDICIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS

La jurisprudencia del TJUE relativa a la independencia ha cobrado especial relevancia tras el surgimiento del llamado *constitutional populism*, presente en los últimos tiempos en algunos Estados miembros, cuya característica esencial es su afán por cercenar la autonomía del Judicial, sometiendo a los designios del poder político. Son significativas, en este sentido, las reformas normativas realizadas en algunos Estados conducentes, bien a reducir o prorrogar a conveniencia la edad de jubilación, a provocar cambios en la duración de los mandatos judiciales, etc.

Los Estados embarcados en esta deriva iliberal han esgrimido frente al TJUE el principio de autonomía procesal, en cuya virtud es a ellos a quienes corresponde organizar la Administración de Justicia, y a la UE respetar estas competencias. No obstante, y a este respecto, el Tribunal ha recordado que el ejercicio de tal competencia no es ilimitado, pues debe respetar los principios y valores esenciales en los que se sustenta la Unión y cumplir con las obligaciones que les impone el derecho de esta, en particular, el art. 19 TUE, apdo. 1, párrafo segundo. Es obvio, en este sentido,

que la independencia de los tribunales nacionales —principio esencial del Estado de Derecho— condiciona la operatividad efectiva de mecanismos como las cuestiones prejudiciales, las órdenes de detención y entrega, etc.

Por este motivo, el TJUE acuñó tradicionalmente un estándar del principio, imprescindible para entender que el tribunal nacional se adecuaba al concepto de órgano jurisdiccional impuesto por el derecho de la Unión, vinculado esencialmente al mecanismo de remisión prejudicial del art. 247 TFUE, y al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 47 CDFUE. En ambos supuestos, la jurisprudencia atendía a la independencia en un sentido específico y singular, en cuanto exigida al concreto órgano para plantear la cuestión prejudicial, o al concreto juez para garantizar la efectividad de la tutela que debía deparar.

La situación sufrió un giro radical a partir de la sentencia de la *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, dictada a raíz de la cuestión prejudicial que planteó el Supremo Tribunal Administrativo de Portugal sobre la interpretación de los arts. 19 apartado 1, párrafo segundo del TUE, y 47 de la CDFUE. Cuestionaba este órgano al TJUE si las medidas de restricción salarial adoptadas en 2004 en Portugal para reducir el déficit presupuestario estatal y aplicables también a los jueces, podrían afectar a la independencia de estos.

Al analizar en esta sentencia los derechos a la tutela judicial efectiva y a la independencia, el TJUE pretirió el art. 47 de la CDUE como referente por lo limitado de su operatividad (las disposiciones de la CDFUE se dirigen a los Estados miembros

La jurisprudencia del TJUE relativa a la independencia ha cobrado especial relevancia tras el surgimiento del llamado *constitutional populism*

únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión, art. 51 CDFUE) por el art. 19 TUE que, de forma amplificada, exige la observancia de estas garantías en todos los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Amén de esta labor de ingeniería hermenéutica, la resolución presenta otro aspecto novedoso. No se trataba de un asunto en el que se pedía al Tribunal un pronunciamiento sobre la imprescindible independencia del juez para poder dotar al justiciable de una tutela efectiva, sino que eran los propios jueces los que solicitaban que se manifestase sobre las medidas acordadas por otros poderes constituidos, por ser potencialmente lesivas de su independencia. La situación en uno y otro caso es netamente distinta: el primero se traduce en la defensa de un derecho fundamental, el segundo en el respeto al principio estructural de la división de poderes y a la defensa del Estado de derecho en la Unión, aspectos estos cuya protección nunca se consideró necesaria por entender su ausencia impensable.

Cuando lo incuestionable deviene seriamente cuestionado, el horizonte se barrunta amenazador. ■

Jurídicamente
incorrecto



Castilla y León:

la naturaleza como patrimonio

Cuando se te viene a la mente Castilla y León es inevitable pensar en su larga historia y la multitud de monumentos que fueron testigos de ella. Su patrimonio histórico y cultural es inmenso, desde grandes catedrales hasta pequeñas iglesias y ermitas que dejaron una importante marca en la historia del arte. Sin embargo, existe un patrimonio mucho más grande pero menos conocido: su patrimonio natural.

Esta extensa comunidad está repleta de multitud de lugares que visitar si eres un apasionado de la

naturaleza, o bien si buscas un lugar en el que desconectar del bullicio de las grandes ciudades. La oferta es tan inmensa como sus parques naturales, donde puedes disfrutar de todo tipo de actividades, como hacer senderismo por la sierra de Guadarrama, avistar aves en la Reserva Natural de Lagunas de Villafáfila, o bien descansar a las orillas del lago de Sanabria. Tanto si eres un apasionado del deporte y de las aventuras como si buscas un lugar donde desconectar, la naturaleza de Castilla y León es una opción ideal ■

PARQUE NATURAL DE LOS ARIBES DEL DUERO: NATURALEZA EN SU ESTADO MÁS SALVAJE

Entre España y Portugal, en la frontera natural que forma el Duero, se enmarca este parque natural que abarca el oeste de las provincias de Salamanca y Zamora. Este paraje natural destaca por unas imponentes vistas de acantilados de hasta 500 metros de altura. Estas espectaculares vistas hacen de sus miradores una parada obligatoria en tu visita al parque.

Una de las actividades más conocidas del parque es su cruceo fluvial, que te permitirá disfrutar de una forma única de las vistas de sus impresionantes cañones. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de cerca la rica biodiversidad, que cuenta con numerosas especies de aves rapaces como el águila real y el alimoche. Otra forma de disfrutar de esta gran variedad de especies es el senderismo, a través de distintas rutas, entre las que destaca el Pozo de los Humos que, además, te llevará a disfrutar de una cascada espectacular.



PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA: UN REFUGIO DE CULTURA Y NATURALEZA

Al sur de la provincia de Salamanca emerge un paisaje único que combina la riqueza natural con el patrimonio cultural. Este parque que abarca el valle de Las Batuecas y la Sierra de Francia nos ofrece paisajes montañosos, valles profundos y bosques frondosos que invitan a la exploración y el descubrimiento. Sin embargo, no se puede hablar de Las Batuecas-Sierra de Francia sin mencionar sus encantadores pueblos, como La Alberca, con su arquitectura tradicional y sus calles empedradas.

La mejor opción para visitar este parque natural es el senderismo, con multitud de rutas entre las que destaca la que conduce al valle de Las Batuecas donde nos encontraremos un rincón de tranquilidad que alberga el monasterio de San José, un lugar de retiro carmelita rodeado de naturaleza. Estas rutas nos permiten descubrir las pinturas rupestres prehistóricas escondidas en las cuevas del valle. Además, este parque es un santuario para la biodiversidad, con una amplia variedad de fauna y flora autóctonas.

PARQUE NATURAL DE MONTES OBARENES-SAN ZADORNIL: AVENTURAS ENTRE MONTAÑAS Y VALLES

Al norte de la provincia de Burgos se encuentra este destino fascinante para los amantes de las aventuras y el deporte. El Parque Natural de Montes Obarenes-San Zadornil ofrece una gran variedad de paisajes desde escarpadas montañas hasta grandes valles con ríos serpenteantes. Pero este parque va más allá de ofrecer una variedad de actividades y unas vistas espectaculares, porque en él nos encontraremos pequeños pueblos que salpican el paisaje, como Frías y Oña, que conservan un encanto medieval con sus castillos, monasterios y arquitectura neogótica.

Una de las actividades más importantes es el ciclismo de montaña, ya que el parque cuenta con senderos bien señalizados que serpentean a través de bosques y praderas, ofreciendo desafíos y aventuras a cada paso. Otra de las actividades más destacadas es el senderismo como la del Desfiladero del Ebro que ofrece unas vistas impresionantes de sus acantilados. Incluso si eres aún más atrevido, podrás disfrutar de la escalada en la zona de Pancorbo.



PARQUE NATURAL DEL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS: UN SANTUARIO DE PAZ Y BELLEZA NATURAL

Esta joya natural se encuentra entre las provincias de Soria y Burgos, donde el río Lobos ha esculpido un impresionante cañón kárstico. Este parque ofrece un paisaje único de formaciones rocosas, cuevas y frondosos bosques de pinos y sabinas que invitan a la exploración y la tranquilidad. Un destino perfecto para quienes buscan disfrutar de la naturaleza en su estado más puro, ofreciendo una combinación de actividades al aire libre y la serenidad de sus paisajes únicos.

El senderismo es una de las actividades preferidas para aquellos que visitan el parque, ya que cuentan con rutas tan emblemáticas como la que lleva a la ermita de San Bartolomé, un lugar místico rodeado de naturaleza y envuelto en leyendas templarias. Además ofrece vistas espectaculares de su cañón y la oportunidad de explorar sus diversas formaciones geológicas. Estas formaciones geológicas son una oportunidad para los aficionados a la espeleología, ya que a los márgenes del río Lobos se encuentran con galerías y cuevas como la de Galiana Baja, una de las más accesibles.

PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS GLACIARES DE NEILA: UN TESORO GLACIAR EN BURGOS

Un paisaje de extraordinaria belleza y valor ecológico situado en la provincia de Burgos. Destaca por sus impresionantes lagunas glaciares, formadas durante la última glaciación, rodeadas de picos montañosos y frondosos bosques de pinos y hayas. El parque es también un refugio para una rica biodiversidad, en la que habitan especies como el ciervo, el jabalí y diversas aves rapaces.

Las rutas de senderismo son una de las principales atracciones del parque. Los senderos que conectan las diferentes lagunas, como la laguna Negra, la laguna de la Tejera y la laguna de los Patos, permiten a los visitantes apreciar la serenidad de las aguas cristalinas y la majestuosidad de los paisajes glaciares. Durante el invierno, el parque se transforma en un destino para los deportes de nieve, con rutas para el esquí de fondo y raquetas de nieve que ofrecen una experiencia única en este entorno tan espectacular cubierto de un manto blanco.



PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁfila: UN PARAÍSO PARA LAS AVES Y LA TRANQUILIDAD

Este enclave situado en la provincia de Zamora es uno de los humedales más importantes de España, especialmente por ser un refugio vital para las aves. Este paraje único destaca por su paisaje compuesto de las extensas lagunas salinas que en las épocas de migración se llenan de vida con la gran variedad de aves y otros animales que se pueden encontrar en él.

La principal atracción de este parque es el avistamiento de aves ya que cuenta con varios observatorios y rutas señalizadas que nos permiten disfrutar de su biodiversidad sin perturbar este maravilloso hábitat. Este lugar es uno de los mejores puntos de observación de aves, especialmente aquellas en peligro de extinción. Además, este paraje está rodeado de pueblos que nos permiten disfrutar de la vida rural tradicional de la región, con su arquitectura y costumbres preservadas.



Equilibristas en la concertina

El Módulo de Discapacidad Intelectual del Centro Penitenciario de Segovia arrancó en 2005 como una experiencia pionera en España, hoy cuenta con 20 internos y se ha convertido en un referente para el tratamiento de presos ‘especiales’

*Por Piluca Burgos,
periodista*

El equilibrio permite enfrentarse a situaciones adversas conservando la calma y la ética. Pero para mantenerse en pie en el alambre que rodea el Módulo de internos con Discapacidad Intelectual del Centro Penitenciario de Segovia —con más de 20 reclusos de graves delitos—, hace falta algo más. El respeto al ser humano se ha convertido en la premisa bajo la que trabajan dos educadores, una psicóloga, una médica, una trabajadora social, varios funcionarios y personal de organizaciones no gubernamentales. Un ajustado equipo de equilibristas que logra llevar a cabo con vocación y profesionalidad la doble función que el Código Penal atribuye a las prisiones: custodia y tratamiento.

A estos profesionales se suman los ‘internos de apoyo’, presos que trabajan y viven en el Módulo 1 de Discapacidad Intelectual y que, según la subdirectora de Tratamiento María José Bartolomé Sanz, ejercen de “figura asistencial imprescindible”. “Es el peor trabajo para un recluso, se enfrentan a conductas muy disruptivas, a veces hasta son agredidos. Continúan en el trabajo por implicación y humanidad”, afirma Bartolomé Sanz. Los cinco ‘internos de apoyo’ que viven con las 20 personas con discapacidad ayudan a ducharse a

sus compañeros, les lavan, les visten y “aplanan muchos conflictos”.

El Módulo 1 de Segovia refleja “el fracaso” de la sociedad en la que vivimos. “Los que terminan aquí es porque en el medio libre no han tenido la ayuda adecuada. Este módulo es la última fase del mecanismo del sistema y por eso debemos proporcionarles rutinas, orden, alimentación correcta, horarios y gestos humanos”, explica la subdirectora de tratamiento, que se ha encargado de este “laboratorio” desde sus inicios.

Una sala de usos múltiples, una escuela, dos aulas independientes, una sala de informática, talleres ocupacionales y un patio para actividades de ocio y deporte componen las instalaciones del Módulo 1. En cuanto a la población reclusa que alberga, tres tipos de internos son susceptibles de ser usuarios de este programa: los sometidos a medida de seguridad de internamiento en un Centro Educativo Especial con una discapacidad intelectual y/o sensorial; los condenados a pena privativa de libertad que presentan una discapacidad intelectual y/o sensorial; y los llamados ‘mixtos’, que tienen unas responsabilidades penadas y también tienen impuestas medidas de seguridad de internamiento. “Lo que está claro es que tienen una cosa muy importante en común: son discapacitados y

por lo tanto presentan unas necesidades muy concretas en lo referente al diseño de su programa de tratamiento y a la intervención a realizar con ellos durante su internamiento”, explica Bartolomé Sanz.

Una de esas necesidades es la de enseñarles a integrarse en la sociedad. Y es que muchos de los familiares o tutores desisten de sus atribuciones legales a medida que los internos cumplen su pena. “Es habitual que los presos del Módulo 1 no cuenten con ningún apoyo fuera. Son personas que han terminado por agotar a sus familias y a su círculo social”, explica Nuria San José, directora del centro penitenciario, que añade: “El sistema no quiere hacerse tampoco cargo de ellos, por eso muchas veces tienen miedo a salir de prisión”.

Los internos con discapacidad “se institucionalizan con mucha facilidad” y muchos encuentran en el Módulo 1 “lo que antes no habían tenido”. “Lo que no me han dado fuera, me lo han dado aquí”, explica Agustín, junto a una ventana del patio, apoyado en la pared, sereno, pero con la mirada perdida. “Me gustaría salir de permiso un ratito, pero prefiero vivir aquí, tengo trabajo y estudio matemáticas”, cuenta de forma sencilla, agradecido y resignado a la vez. Las clases y el aprendizaje son la motivación de Agustín, porque puede mostrar a su familia todo lo que aprende con

los profesores. “La última vez que vinieron me puse a llorar”, cuenta ya nervioso. “Me gusta verles, pero estoy mejor aquí”, acierta a decir, conforme con su destino, como el que se teme a sí mismo y no puede evitarlo. La mayoría acumula delitos muy graves.

Hace sol, y el patio del Módulo 1 está tranquilo, sin ruido, sin voces. Es un patio apaciguado. Los internos con discapacidad se entremezclan con internos de apoyo; todos pasean, a veces charlan, a veces ni se miran. La trabajadora social Sara y el educador Félix dirigen el montaje del jardín vertical del módulo. Los presos, brocha en mano, pintan un palé de madera que soportará las macetas. “Nosotros nos centramos en intentar que estén cómodos y en resolver los problemas que van surgiendo, porque no tienen capacidad para hacerlo por sí mismos”, explica Sara, ante la aprobación de su compañero Félix. Ambos disfrutan “tremendamente” de su trabajo. “Eso sí, las cosas hay que decírselas 25 veces, pero al final las hacen. Son efectivos y cariñosos”, cuentan mientras sus ‘alumnos’ intentan intervenir en la conversación.

“Son muy demandantes”, explica esta trabajadora social, que lleva 18 años destinada en el módulo, y a la que parece que ni el tiempo ni las dificultades le han hecho mella en la ilusión. “Me gusta estar aquí. Son más manejables de lo que parecen, se les puede encarrilar bien. Solo hace falta cariño y disciplina”. Una receta que llevan a pies juntillas cuando salen a dar paseos al campo o de excursiones culturales y que “además funciona en cualquier ámbito de la vida”, puntualiza Sara.

Tarde o temprano estos reclusos volverán a pisar el mundo real. Un mundo al que deben adaptarse, un lugar por el que hace años que no transitan y al que se enfrentan con severas discapacidades. Once de los veinte reclusos del Módulo 1 tienen una discapacidad superior al 65 %; siete, entre el 45 y el 65 %; mientras que solo dos están por debajo del 40 %. “Somos conscientes de que terminarán por salir y de que muchos han perdido el contacto total con el exterior”, analiza Félix, el educador social que lleva décadas acompañándolos a pasear por el campo, a ver el Alcázar e incluso comer en un restaurante. “Ellos siempre prefieren la naturaleza. Se paran con cualquier cosa que ven, la disfrutan como nadie”.

En otra parte del patio, junto a la lavandería que ellos mismos gestionan, se forma otro corrillo alrededor de la directora. Lleva apenas tres meses en Segovia, pero todos los reclusos saben su nombre. Algunos son viejos conocidos de Villanubla, donde ella ejercía de subdirectora de Tratamiento; le hablan con respeto, pero con cercanía. “Señorita Nuria, quería decirle una cosa si no le ofende —le interpela el recluso Ascanio—, me gustaría que me sacaran de aquí y me mandaran al Módulo 2. Allí puedo hacer más cosas”. Nuria le mira, sonríe y calla. “Bueno, estoy pensando que puede que sea mejor para mí estar aquí...”. “Ya —contesta Nuria San José— porque si vuelves



A la izquierda, Jardín vertical elaborado por los internos del Módulo 1. Abajo, la subdirectora de Tratamiento, María José Bartolomé Sanz, y la directora del Centro Penitenciario de Segovia, Nuria San José, pasean por el patio de la prisión



al 2, ¿qué pasaría?”. “Lo de siempre —confiesa Ascanio—, me volvería a drogar, volvería a meterme en jaleos, y la liaría... Es verdad, estoy mejor aquí. Gracias por su consejo”.

“Me lo pide siempre que me ve”, explica Nuria con media sonrisa. “Son muy demandantes”, reitera Sara, y los tres ríen.

En el piso de arriba está Juan Carlos, otro educador social que les enseña escuela básica, estimulación cognitiva y habilidades para la vida diaria. También reciben educación en agresiones sexuales y en drogas. Hacen deporte cinco días por semana y algunos tienen destinos para trabajar fuera del módulo como Cocina, Biblioteca o Servicio de basuras. “Cuando hago actividades se me olvida todo, pero por la noche llega la música”, cuenta un interno mientras hace una manualidad.

La luna alienta a los fantasmas en el Módulo 1. Las noches son complicadas para los ‘internos de apoyo’ que duermen con sus celdas abiertas para poder salir a convencer a los espectros de que se vayan al patio a pasear ahora que no hay nadie. “Nunca imaginé que fuera capaz de desarrollar la paciencia que

he desarrollado”, se sorprende un ‘interno de apoyo’, que cuenta con total naturalidad que “jamás” habría pensado que terminaría por cambiarles los calzoncillos. “Son como niños”, dice. “No son como niños”, corrige la psicóloga María José Bartolomé Sanz. “Tienen las capacidades volitivas y cognitivas alteradas. No cuentan con un nivel superior de razonamiento; no lo alcanzan. Un niño de siete años, sí”, explica con la experiencia que otorga lustros como piedra angular del proyecto.

Las 50 plazas del Módulo 1 de Discapacidad Intelectual no están cubiertas. “Hay internos con discapacidad en todas las cárceles españolas, pero muchos están sin diagnosticar”, concreta María José Bartolomé Sanz. La discapacidad intelectual se cuela en todas las sociedades y con mayor fuerza en la población reclusa. El Módulo 1 del Centro Penitenciario de Segovia refleja el fracaso de la sociedad actual, pero también muestra —en la figura de los ‘internos de apoyo’— que la reinserción es una realidad y que el respeto al ser humano sirve para mantener el equilibrio de los funambulistas que ejecutan a diario su trabajo sobre concertinas. ■

El denominado 'día de gracia' y su aplicación a los plazos sustantivos:

El nuevo artículo 135.5 de la LEC¹

Por Fernando Toribios Fuentes,
procurador de los Tribunales,
doctor en Derecho,
profesor Asociado de Derecho Civil. UVA;
y
Andrés Domínguez Luelmo,
catedrático de Derecho Civil. UVA

Dentro de la vorágine de las modificaciones procesales introducidas por el RDley 6/2023, ha pasado desapercibida la reforma del art. 135.5 LEC, que hace ahora extensiva la aplicación del denominado *día de gracia*² también al vencimiento de los plazos sustantivos.

Es de sobra conocida —y empleada— la posibilidad de presentar los escritos sometidos a plazos preclusivos hasta las quince horas del inmediato día hábil posterior al del vencimiento. Así se estableció en la redacción original del art. 135.1 LEC: “Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo...”.

Pues bien, el RDley 6/2023 ha reformado el precepto en cuestión, que ha pasado a ser el actual art. 135.5 LEC, y ha decidido dar un paso más al hacer extensiva ahora esa posibilidad no solo a los plazos *procesales* sometidos a vencimiento (preclusión), sino también a los plazos *sustantivos* (caducidad, prescripción): “La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, procesal o sustantivo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo”.

Esto abre un nuevo escenario para cuya mejor comprensión resulta conveniente analizar la evolución legislativa y jurisprudencial acontecida en este particular, estructurándola a través de cuatro etapas claramente diferenciables, lo que nos permitirá ver cómo ha sido resuelto el problema de que, en ocasiones, el derecho material solo podría articularse, es decir, materializarse, a través del ejercicio de una acción procesal, para cuya promoción el justiciable debía adaptarse a las reglas procesales que, en cada momento normativo y organizativo, estaban vigentes.

UN RECORRIDO POR SU REGULACIÓN DESDE 1881 HASTA 2023

La primera etapa se enmarca durante la vigencia de la LEC 1881, en la que se permitía la presentación de cualquier escrito (demandas inclusive) ante el juzgado de guardia. En efecto, en el marco normativo y organizativo de la Administración de Justicia previo a la actual LEC, ningún problema se planteaba, toda vez que el ejercicio en plazo de los derechos sustantivos no se veía limitado ni restringido en medida alguna por el marco legal y organizativo de los tribunales. Es por ello que los tribunales hacían una interpretación rigorista del cómputo de los plazos sustantivos, como se desprende, entre otras, de la STS 10-11-1994, en la que se mantenía una estricta aplicación del cómputo de los plazos sustantivos y restrictiva en cuanto a su asimilación a los plazos procesales, y que por tanto debía de aplicarse el art. 5 CC y no el art. 182 LOPJ.

La segunda etapa arranca con la actual LEC, que quiso atajar el empleo abusivo de las funciones del juzgado de guardia (que en puridad era, por lo general, un juzgado de instrucción o, en algunas plazas, un juzgado

mixto o único), como una suerte de registro de presentación de demandas y escritos para los restantes órdenes jurisdiccionales, fuera del horario de atención al público de los órganos destinatarios de tales escritos. De este modo se decidió prohibir, mediante su inadmisión, la presentación ante el juzgado de guardia de escritos dirigidos a los tribunales civiles. Eso suponía, si bien se mira, recortar el plazo del que disponía el justiciable, pues de este modo no podía disfrutar el concreto plazo en su integridad, dado que el día del vencimiento solo podía presentar sus escritos (demandas inclusive) durante el horario de atención del juzgado o registro. El art. 135.2 LEC era claro al respecto: “En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia”. Pero el legislador, sabedor de que estaba recortando el disfrute pleno de los plazos, decidió *compensar* la eliminación de la tarde-noche del día de vencimiento, otorgando a cambio la mañana del inmediato día hábil posterior: *quid pro quo*.

La solución fue satisfactoria, pues logró que los juzgados de guardia cumplieren su función primigenia y no otras. El problema que planteó la LEC es que no admitía la presentación en el juzgado de guardia de demandas dirigidas a los tribunales civiles, con lo que quedaba en el aire el cumplimiento de los plazos sustantivos. Podía presentarse un recurso hasta el día hábil siguiente al del vencimiento, pero nada se preveía respecto de los plazos de prescripción o de caducidad.

Por lo tanto, la interposición de una demanda en el ejercicio de un derecho cuyo plazo sustantivo caducaba o prescribía un día procesalmente inhábil, no era legal ni materialmente posible, toda vez que la oficina o registro estaba cerrada y el juzgado de guardia inadmitía su presentación. Como vemos, asistíamos a una disfunción cuando el derecho sustantivo solo podía materializarse mediante el ejercicio de una acción procesal ante los tribunales (interposición de la correspondiente demanda). El problema no era menor, pues al ser distinto el sistema de cómputo civil del procesal, el justiciable constataba que su plazo sustantivo podía verse literalmente recortado por la organización procesal, acomodada especialmente en el ámbito civil, a un calendario de días hábiles.

No obstante, en los casos en los que el ejercicio del derecho sometido a plazo de prescripción o caducidad se realiza a través de un acto de naturaleza procesal (como es la presentación de una demanda de retracto), cabía plantear la posibilidad de tomar en consideración que el último día del plazo sea inhábil a efectos procesales. En este sentido, lo único que podría tenerse en cuenta es lo previsto en el art. 133.4 LEC: “Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil”. Vid. la SAP Valladolid (Secc. 3ª) 9-5-2011

La cuestión, exclusivamente referida al ejercicio judicial del derecho de retracto, fue igualmente contemplada por el TS, que apuntó la posibilidad de aplicar el art. 135.1 LEC antes de ser reformado por el RD Ley 6/2023. En este sentido, se pronunciaron las SSTs 29-4-2009;30-4-2010;28-7-2010 y 20-10-2011.

En cualquier caso, la posibilidad de aplicar al cómputo civil los arts. 133.4 y 135.1 LEC debía ser objeto de interpretación restrictiva, extensible solo al ejercicio de retractos u otras acciones de necesaria promoción jurisdiccional, como lo son —entre otras— la impugnación de acuerdos sociales, o de acuerdos de juntas de comunidades de propietarios, por considerar que no es posible su ejercicio extrajudicial. De este modo, la jurisprudencia mantuvo la diferenciación clara entre plazos sustantivos y procesales, pero posibilitaba la aplicación a los primeros de la normativa re-

de caducidad, el derecho, el ejercicio de la acción y la interposición de la demanda”, tal y como afirma la STS 11-7-2011.

Esta es la esencia del problema: en ocasiones el derecho material solo podría articularse, es decir, materializarse, a través del ejercicio de una acción procesal, para cuya promoción el justiciable debía adaptarse a las reglas procesales que, en ese momento normativo y organizativo, no posibilitaban la presentación de una demanda un día festivo, pues no existía oficina o registro disponible al efecto. De este modo, el modelo organizativo jurisdiccional restringía el plazo sustantivo, pues no permitía al justiciable disponer del plazo sustantivo en su integridad [Cfr. SAP Madrid (Secc. 12.ª) 8-7-2009], lo que imponía a los tribunales hacer una interpretación flexible, de tal modo que, cuando el plazo sustantivo exigía la promoción de una acción

jurisprudencial del año 2009, se compadecía mal y exigía ser revisado con la nueva redacción que, tras la Ley 42/2015, recibió el art. 135.1 LEC⁴: “Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las veinticuatro horas”. Ese importante cambio legal, que permitía presentar escritos *todos los días del año durante las veinticuatro horas*, inevitablemente exigía un replanteamiento de la cuestión, pues a partir de ese momento normativo y tecnológico, ningún obstáculo impedía la presentación de una demanda cualquier día y a cualquier hora (fuese hábil o inhábil), por lo que las conclusiones mantenidas por la antes citada STS 29-4-2009 no eran ya defendibles, lo que significaba lisa y llanamente que el derecho sustantivo podía y debía materializarse conforme a sus propias reglas de cómputo, ya que la or-



FOTO: PIXABAY

ferente a los segundos, no en cuanto a su cómputo, sino en cuanto a su materialización. No existía confusión ni asimilación de unos plazos y otros, sino que se trata de aplicar o computar los plazos procesales para hacer efectivos los plazos sustantivos, toda vez que “... el derecho y la acción se ejercitan en la demanda y esta es la que inicia el proceso. Existe una estrecha vinculación entre el plazo

procesal, su cómputo debía acomodarse a las posibilidades que el sistema organizativo jurisdiccional ofrecía³. Así, v. gr., si el plazo para el ejercicio de una acción caducaba un domingo, se permitía la presentación de la demanda en el inmediato día hábil posterior.

La tercera etapa en esta cuestión arranca con la reforma del art. 135.1 LEC por medio de la Ley 42/2015. En efecto, el criterio

organizativo procesal (Oficina o Registro), no limitaba ni restringía el ejercicio en plazo de los derechos y acciones. Así, la SAP Zaragoza (Secc. 4ª) 20-11-2000 afirmó: “Ahora no hay problema material para que el cómputo del plazo sustantivo se realice de forma autónoma respecto al procesal, y ello porque no





FOTO: PEXELS



hay ahora dificultad material en la presentación de escritos en cualquier hora y día, y que esa presentación tenga los efectos que tengan que tener en el orden sustantivo”.

Esta línea jurisprudencial creó un nuevo panorama, como la propia sentencia comentada lo calificaba, a pesar de que ya la propia AP de Zaragoza se había pronunciado en dos ocasiones anteriores en idéntico sentido; resoluciones que pasaron desapercibidas. Nos referimos a las SSAP Zaragoza (Secc. 4.ª) 21-12-2017 y 5-2-2018). Sin embargo, cabe destacar que también encontrábamos otros pronunciamientos que se apartaban de este criterio, es decir, que mantenían la vigencia de la línea jurisprudencial de la antes citada STS 29-4-2009, línea que entendían que no había variado pese a la reforma del art. 135.1 LEC por la Ley 42/2015. Así, la SAP Pontevedra (Secc. 1ª) 12-9-2019 o la posterior SAP Cáceres (Secc. 1ª) 30-1-2020.

MODIFICACIÓN POR RELEY 6/2023

La última e importante etapa en la evolución legislativa que analizada, comienza con la modificación del art. 135.5 por medio del RDley 6/2023, que en su nueva redacción permite la presentación de escritos y documentos sujetos a plazo, procesal o sustantivo, hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Dos son las cuestiones que merece

destacar. En primer lugar, se mantiene invariable la prohibición de presentar escritos para los tribunales civiles ante el juzgado de guardia. En segundo lugar, cabe reseñar que la presentación de escritos y documentos, si estuviera sujeta a plazo, sea este procesal o —ahora también— sustantivo, podrá hacerse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Esta importantísima modificación significa que se *procesalizan* los plazos sustantivos, pues, aunque su cómputo se somete a las reglas del CC, su ejercicio procesal, por el contrario, se acomoda a la normativa adjetiva. Si bien se mira, aunque los plazos sustantivos y procesales divergen en cuanto a las reglas de cómputo, la nueva regulación provoca que converjan el día final del cómputo en lo que a su ejercicio ante los tribunales se refiere. En el fondo late la idea de que el ejercicio de un derecho sustantivo a través de una demanda es un acto de naturaleza procesal que da lugar con su admisión a la iniciación del proceso.

V. gr., si queremos impugnar los acuerdos tomados en una junta de propietarios celebrada el 6-8-2023 que vayan en contra de los Estatutos (plazo de un año), el plazo sustantivo expirará el 6-8-2024, pero con la nueva redacción del art. 135.5 LEC, podremos presentar nuestra demanda hasta las quince horas del primer día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, que en nuestro caso será el día 2-9-2024. Otro ejemplo: si

la junta de propietarios se celebró el 31-7-2023, el plazo vencería el 31-7-2024, pero podríamos presentar nuestra demanda hasta las 15:00 horas del primer día hábil posterior, que en este caso sería igualmente el 2-9-2024. Por lo tanto, es indiferente que el plazo sustantivo finalice un día hábil o inhábil, pues en todo caso se permite la presentación hasta las 15:00 horas del inmediato día hábil posterior.

En suma, los plazos sustantivos de ejercicio procesal (v. gr., demandas de acciones

Es indiferente que el plazo sustantivo finalice un día hábil o inhábil, pues en todo caso se permite la presentación hasta las 15:00 horas del inmediato día hábil posterior

de impugnación de acuerdos sociales, retractos, etc.) se convierten o tratan normativamente como plazos preclusivos en orden a su ejercicio tempestivo. Esto provocará, sin duda, que determinados plazos sustantivos especialmente breves vean ampliada sustancialmente su duración al trasladarlos al calendario procesal, insistimos, no en lo que a su cómputo se refiere, sino exclusivamente en orden a su ejercicio ante los tribunales. Ello será también extensible, si bien se mira, a los plazos prescriptivos, pues plazos sustantivos son.

Finalmente, en lo que al ámbito *temporal* de aplicación del precepto se refiere, hemos de remitirnos a la DT segunda del RDley 6/2023, en virtud de la cual el contenido del art. 135.5 LEC se aplicará solo y exclusivamente a los nuevos procedimientos, entendiendo por tales los promovidos desde el 20 de marzo de 2024 (entrada en vigor de la norma), por lo que no será de aplicación a los que ya se encontrasen en trámite en esa fecha: “Las previsiones recogidas por el libro primero del presente real decreto-ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que en este se disponga otra cosa”. ■

(1) El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación PID2019-107296GB-I00 (“Derecho transitorio, retroactividad y aplicación en el tiempo de las normas jurídicas”), financiada por MICIU/AEI /10.13039/501100011033.

(2) Expresión recogida incluso por la jurisprudencia. Cfr. STC 47/2014, de 7 de abril (ECLI:ES:TC:2014:47).

(3) Sobre este punto la doctrina de las Audiencias Provinciales estaba dividida [cfr. SAP Madrid (Secc. 12ª) 8-7-2009 (ECLI:ES:APM:2009:11940), antes citada], pues no todas entendían aplicable a los plazos no procesales el cómputo procesal.


(4) LÓPEZ CHOCHARRO, I., “Los plazos sustantivos y los plazos procesales; divergencias sobre su cómputo y la posible aplicación a los primeros del art. 135 LEC. Análisis de la controvertida sentencia de la AP de Zaragoza de 20/11/2020”, en *Diario La Ley*, núm. 9840, Sección Tribuna, 29 de abril de 2021, p. 9, afirma que “Con el nuevo redactado del art. 135 se puede entender que todo lo que se había debatido hasta ahora acerca de la posibilidad de aplicar el ‘día de gracia’ a la presentación de demandas derivadas de un plazo sustantivo quedaba en nada, pues a partir de ahora la imposibilidad de presentar escritos de plazo ante el juzgado de guardia no era impedimento alguno para que el titular del derecho al plazo pudiera disponer del mismo en su integridad”.

Página del BOE de 1975

DERECHO

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

Distrito Universitario de Granada.—Facultad de Derecho.



Firma del alumno.

Federico García Lorca

REGISTRO DE IDENTIDAD ESCOLAR

Hijo de D. *Federico* y de D. *Rebeca* que nació el día 5 de *enero* de 1898, en *San Sebastián*, provincia de *Guipúzcoa*. Bachiller por el Instituto general y técnico de *San Sebastián* en el primer ejercicio y de *San Sebastián* en el segundo. Título expedido por el Rectorado de *San Sebastián* en de *San Sebastián*.

PERIODO DE LA LICENCIATURA

Real decreto de 23 de Octubre de 1914. Real orden de 8 de Febrero de 1915.

ASIGNATURAS	CURSO	Unidad donde		Notas en los exámenes		OBSERVACIONES.
		Se matriculó	Se examinó	Ordinarios.	Extraordinarios.	
PERIODO PREPARATORIO.						
Lógica fundamental.	1.º					
Lengua y Literatura españolas.	1.º					
Historia de España.	1.º					
PERIODO DE LA LICENCIATURA.						
Elementos de Derecho natural.	1.º					
Instituciones de Derecho romano.	1.º					
Economía política.	1.º					
Historia general del Derecho español.	1.º					
Instituciones de Derecho canónico.	1.º					
Derecho político.	1.º					
Derecho civil, 1.º curso.	1.º					
Derecho administrativo.	1.º					
Elementos de Hacienda pública.	1.º					
Derecho penal.	1.º					
Derecho civil, 2.º curso.	2.º					
Derecho mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América.	2.º					
Procedimientos judiciales.	2.º					
Derecho internacional público.	2.º					
Práctica forense.	2.º					
Derecho internacional privado.	2.º					
ASIGNATURAS REPETIDAS.						

Ficha de Federico en la Facultad de Derecho de Granada. / ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Federico, el abogado que nunca ejerció

Aunque Lorca renunció a ejercer como abogado, su obra está innegablemente influenciada por sus conocimientos jurídicos

Por Irene Marcos Ramos,
abogada y escritora

Agustín Viñuales, su profesor de Hacienda Pública, en un ejercicio de impaciencia y generosidad, requirió al poeta y dramaturgo para que procediese a calificarse a sí mismo. Su profesor de Derecho Mercantil, cautivo ante la realidad de una inminente jubilación y la certeza de que el examen de Federico sería el último que calificase tras una larga carrera, le concedió un magnánimo aprobado. Con una ingeniosa respuesta sobre la pena de muerte,

redimió del suspenso el Derecho Penal, y con una mezcla de suerte y aprobados de mogo llón, Federico García Lorca se licenció, a su pesar, en la Facultad de Derecho de Granada, cumpliendo así el cadalso de un sueño ajeno impuesto por su padre.

La andadura de Federico a través de los estudios de Derecho estuvo regada de las idas y venidas propias de quien no quiere lo que hace, de quien presa de la incertidumbre propia de la juventud huye hacia adelante.

Fue su profesor de Derecho Constitucional, Fernando de los Ríos, quien, tras convenir al padre del poeta, rubricase las cartas de

recomendación que le permitieron acceder en 1919 a la Residencia de Estudiantes de Madrid.

En aquellos años Federico se embriagó de la compañía de personas como Dalí, Buñuel o Alberti, saboreó un Madrid ajeno a las telarañas provincianas que lo ahogaban en Granada, publicó *Libro de poemas* —que al igual que *Impresiones y paisajes* también hubo de financiar su padre— dejó sus últimas monedas en el bar del Palace, conoció noches de luna y embelesó a la sociedad madrileña con la luz de una personalidad arrolladora, joven e irresistible. Dijo Salinas que Federico era “ese hervor, ese bullicio, esa animación que levantaba su persona entera por donde iba. Se le sentía venir mucho antes de que llegara; le animaban impalpables correos, avisos, como de las diligencias de su tierra, de cascabeles por el aire. Cuando ya se había marchado, aún tardaba mucho en irse, seguía allí, rodeándonos aún de sus ecos, hasta que de pronto decía uno: “Pero ¿se ha ido ya Federico?”

También fue su profesor de Derecho Constitucional quien persuadió al padre de Federico para que le permitiese acompañarle a Nueva York en 1923, viaje sin el que nunca hubiera escrito sobre la aurora de la ciudad que no duerme en *Poeta en Nueva York*. Sería también Fernando de los Ríos quien, años después y ya como ministro de Instrucción Pública, financiase la Barraca, la compañía que hizo llegar el teatro clásico a rincones olvidados de España.

A pesar de que el derecho fuese un sueño ajeno para Federico, la influencia de las enseñanzas que recibió en la Universidad de Granada resulta innegable en su obra, en la que sus personajes se encuentran ante la diatriba entre lo socialmente aceptado y lo que consideran naturalmente innegable. Pensemos en Mariana Pineda, la mujer que en su lucha contra el absolutismo de Fernando VII bordó en la bandera de la libertad el amor más grande de su vida. En la novia de *Bodas de sangre*, que ante el abismo de lo que se esperaba de ella supo que callar y quemarse era el peor castigo que se podía echar encima. En Yerma, la mujer a quien su propia sangre se le volvía veneno por no poder dársela a los hijos que no concebía. En doña Rosita, la soltera que recibía cartas desde América y se enterraba en un lodazal de qué dirán. En Adela, la hija de Bernarda Alba que se negó a hundirse en un mar de luto impuesto por su madre.

Desoyendo el consejo de buenos amigos, Federico viajó a Granada en agosto de 1936. Tras dos registros en su domicilio familiar, se refugió ocho días en la casa de los Rosales, viejos amigos afiliados a Falange desde sus inicios. A pesar de la defensa de la familia Rosales, Federico fue detenido y llevado al Gobierno Civil, donde permaneció en una habitación con una ventana enrejada y vistas al jardín botánico. Hoy, esta habitación en que Federico estuvo detenido antes de ser fusilado en la carretera entre Víznar y Alfacar, es el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Granada. ■



Carmina Burana por la Fura dels Baus / Foto: Jorge Echagavía

Incongruencias

Por Fernando Herrero

Vivimos en una época difícil con alternativas sociales, políticas, económicas, jurídicas y culturales. Aceptamos la pugna Trump-Biden para la Presidencia sin que los partidos ni el sentido común lo impidan. En España, dos episodios, el de Barbate y los narcos que campan por sus respetos, asesinan y han construido ilegalmente un barrio. La justicia es impotente, sin medios, y burlada. Segundo, aunque fue anterior, el caso de los más de 7000 muertos en las residencias en Madrid que no pudieron acceder a los hospitales, y las ridículas explicaciones que se dieron. ¿No debería intervenir la Justicia? También hay que anotar el descenso artístico: televisiones parecidas, concursos, repeticiones, gastronomía, series, política del odio. En la sociedad de hoy es mayoría la gente que quiere vivir tranquila y consumir preferentemente los fenómenos tópicos que abundan.

Como siempre son diversas las interpretaciones, procedentes de las redes sociales y algunos medios de comunicación difusos y mediáticos. Una tecnología cada vez más amplia nos asegura la posibilidad de crear obras nuevas, nuevos milagros o, por el contrario, acceder a lo fácil, a lo mayoritario ¿Cuál es la vía elegida?

Interpretar los conceptos. Hoy día tenemos ejemplos claros en los que la semántica se une a lo jurídico y a la posibilidad de la actuación de los tribunales. Dos conceptos: terrorismo y libertad de expresión ¿El caso *Tsunami* de Cataluña es terrorismo? Discrepancias jurídicas. Al fin el Supremo investiga a Puigdemont. Razones no muy claras y en un momento en que se entrecruzan los poderes legislativo y judicial, nada apropiado y con un sabor político inoportuno.

Libertad de expresión: apalean un muñeco del presidente del Gobierno en la calle, a las puertas de la sede de su partido, con golpes y palabras soeces. Se ha considerado jurídicamente como "libertad de expresión". Absurdo. Si se considera finalmente así, la calle podría ser inviable. Otra vez el sople político, porque según otra mirada ideológica la censura que se está realizando de algunas exposiciones u obras de teatro es justa. Un descabellado comparativo.

Ha llegado la hora de superar estas incongruencias, de que el sentido común se imponga, de rechazar las versiones más pueblerinas, de la vida en común, de evitar las guerras y la corrupción. Parece casi imposible, pero hay solución, aunque sea muy

difícil. La solidaridad razonable debe sustituir al odio en la convivencia. Solidaridad que no engañe. Hoy las huellas de acciones campesinas que no pueden considerarse tales causan graves perjuicios económicos y sociales. Hay que hacer justicia, limar la desigualdad, favorecer a los más necesitados, sustituir la burocracia por la productividad y un etc. muy largo.

Siempre he sostenido que la cultura es necesaria incluso para mejorar no solo las relaciones ciudadanas sino también la productividad económica. Era muy pesimista en este último aspecto, pero un dato reciente ha sido muy significativo. La Fura dels Baus presentó en el Calderón *Carmina Burana*. Durante cinco días, hubo que añadir uno a los programados, llenos absolutos. Éxito apoteósico. Una compañía teatral de estética propia y nada vulgar potencia un éxito clamoroso. Esperanzas existen pues, de que esa línea del futuro mejore. Los viajes, los llenos del Auditorio ayudan.

Ahora es necesario arreglar lo del Consejo del Poder Judicial como inicio de la regulación de uno de los poderes del Estado y que las manos tendidas sustituyan al odio y el insulto que hoy rigen en la vida política. ■

Copenhague, la bella capital danesa



Por *Mónica Vielba Serrano,*
abogada

Puerto marítimo, Nyhavn

Copenhague se ubica entre las islas litorales de Selandia y Amager. La capital de Dinamarca es una ciudad preciosa, llena de rincones, calles y lugares con mucho encanto, con innumerables opciones para el turista. Es la capital más acogedora del norte de Europa, es limpia, ecológica y vanguardista, con una arquitectura moderna que combina a la perfección con majestuosos palacios.

La imagen típica de Copenhague es sin duda el **Nyhavn**, el puerto marítimo de la ciudad. Es el barrio más atractivo, pintoresco y colorido de la capital. Es una zona de postal gracias a su canal y, especialmente a

las fachadas de las casas de colores y a los barcos históricos de madera anclados en el puerto. Esta repleto de cafeterías y animados restaurantes. Merece la pena pasear y disfrutar de su ambiente.

Pero el símbolo más reconocible y fotografiado de la capital danesa es la **estatua de La sirenita**. Esta escultura de bronce de poco más de un metro de altura, fue realizada en 1913 por Edvard Eriksen. Es el monumento más visitado de Dinamarca y está inspirada en uno de los cuentos más conocidos de Hans Christian Andersen. Desde su instalación ha sufrido innumerables actos

vandálicos. Está situada en la bahía del puerto del parque Lingelinie. Es obligatorio hacerse una fotografía junta a esta bella estatua.

Otro lugar que no hay que perderse es la **Rådhuspladsen**, la plaza del Ayuntamiento. Está presidida por el ayuntamiento de la ciudad, un singular edificio mezcla del renacimiento italiano y la arquitectura danesa medieval, finalizado en 1905. Desde su torre de 106 metros de altura, la más alta de la ciudad, se puede disfrutar de maravillosas vistas. Su reloj astronómico, situado en la entrada principal, aparte de dar la hora local, la sideral y la solar, muestra la rotación de los planetas.



Casa en la ciudad libre de Christiania

IMPRESINDIBLE: La ciudad libre de Christiania

La ciudad libre de Christiania es uno de los lugares más curiosos para visitar en Copenhague. Es una ciudad independiente dentro de la capital danesa en la que residen alrededor de 1000 personas y conviven conforme a sus propias normas, siguiendo un estilo de vida alternativo y bohemio. Surgió en los años 70 del siglo pasado como un experimento social liderado por el movimiento 'hippy'. Los vecinos declararon la independencia de su territorio frente al estado danés. De hecho, en el barrio hay un cartel que dice que estas saliendo de la Unión Europea y la policía tiene prohibida la entrada. Este peculiar barrio tiene salas de música, galerías de exposiciones, viviendas hechas manualmente con materiales reciclados y caravanas de madera. La circulación de vehículos está prohibida, los caballos pastan libres y el medio de transporte son las bicicletas. Sus pequeñas tiendas y cafeterías utilizan la moneda especial de Christiania. Es un lugar imprescindible para visitar.



Plaza del Ayuntamiento



La sirenita

Preside la plaza una estatua de Andersen y la fuente del dragón, que representa a un toro luchando con un dragón.

Saliendo de la plaza nos encontramos con **Stroget**, la calle peatonal más larga de Europa (3,2 kilómetros), rodeada de tiendas y restaurantes. Miles de personas transitan por ella cada día, es la calle perfecta para los amantes de las compras. Es un espacio de gran atractivo cultural con espectáculos callejeros de música y artes escénicas que amenizan el paseo.

Otro lugar destacado de la ciudad es el **palacio de Amalienborg**, la residencia oficial de la realeza danesa. Se encuentra dividido en cuatro palacios. Merece la pena ver el cambio de guardia que se realiza cada día a la 11.30 horas de la mañana. Estos soldados con uniforme azul desfilando es uno de los puntos de interés más visados de la capital.

La iglesia de mármol o **Marmorkirken** se encuentra situada a poca distancia del palacio de Amalienborg. Es de estilo barroco, data del siglo XVIII y posee una espectacular cúpula que recuerda la basílica de San Pedro.

Es la más grande de Escandinavia y sin duda el edificio religioso más bonito de la ciudad.

Otro lugar imprescindible es el **Tivoli**, el parque de atracciones más antiguo del mundo. Su ambientación se mantiene intacta desde su inauguración a finales del siglo XIX, entre ellos la puerta de la entrada, construida en 1843. Es uno de los lugares preferidos de los daneses, ya que combina su esencia original con las atracciones más modernas.

Desde la **Rundetårn** (la torre redonda), en el centro de Copenhague, se puede tener una buena panorámica de la ciudad. Esta torre de 35 metros de altura es uno de los observatorios astronómicos más antiguos de Europa. Es conocida por su pasillo helicoidal que recorre siete vueltas y media antes de llegar a la parte más alta.

En la pequeña isla de Slotsholmen se encuentra la sede danesa del Gobierno. El **palacio de Christiansborg**, que tiene más de 800 años de historia, alberga en la actualidad el Parlamento, la oficina de primer ministro y el Tribunal Supremo. Merece la pena visitarlo si vas a Copenhague. ■



¿SABÍAS QUE...?

- Dinamarca posee la bandera más antigua del mundo.
- En Copenhague hay más bicicletas que personas. 2,3 bicicletas por habitante.
- Hamlet, los vikingos y el Lego son orígenes de Dinamarca.
- Debido a su reducido tamaño y a ser una península, no hay ningún lugar del país a más de 52 km de la costa.
- Es un país muy plano, el punto más alto es una colina llamada Mollehoj, que se encuentra a 170 metros sobre el nivel del mar.
- Aunque Dinamarca es miembro de la Unión Europea, no utiliza el euro, su moneda es la corona danesa.
- El danés es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Tiene tres vocales que no existen en nuestro alfabeto: Æ, Ø y Å.
- Dos tercios de los daneses tiene el apellido acabado en -sen, que significa "hijo de".
- Según la tradición, si tienes 25 años y aún no tienes pareja, te tirarán canela en tu cumpleaños para darte suerte para encontrar una.
- El gobierno danés fomenta la natalidad con una paga trimestral por hijo hasta la mayoría de edad.
- El territorio de Groenlandia pertenece a Dinamarca.
- Los daneses se consideran los más felices del mundo y suelen estar entre los primeros países en el informe de felicidad de la ONU.
- En danés no existe una palabra para decir "por favor", en cambio dan las gracias por todo.

LO MEJOR: Copenhague es una ciudad moderna, cosmopolita y llena de contrastes.

LO PEOR: Dinamarca tiene un clima muy duro, llueve o nieva con mucha frecuencia, acompañado de fuertes vientos, sobre todo en otoño e invierno.



Iglesia de marmol (Marmorkirken)



Tivoli

FORMACIÓN EN EL ICAVA

LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS PROTAGONIZAN LAS JORNADAS FORMATIVAS.

El Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre y las distintas reformas de leyes procesales que contiene fueron objeto de dos de los numerosos cursos y jornadas de formación que tuvieron lugar en el ICAVA durante el primer semestre de 2024. Así mismo, las novedades referidas a seguridad social fueron objeto de estudio, junto con distintas materias en el ámbito penitenciario y menores, que configuraron los cursos de obligado seguimiento para los colegiados adscritos a los turnos de oficio especializados. A todo ello hay que añadir temáticas habituales, como las referidas a violencia de género, familia y mediación, junto con la impartida para el resto de colegios de la abogacía de Castilla y León por la letrada Arantxa Jaén sobre la hoja de encargo profesional. El seguimiento de todos ellos fue numeroso, especialmente en la modalidad *on line*, si bien poco a poco se va recuperando la presencialidad en el salón de actos del colegio.



COMPETICIONES DEPORTIVAS

GOLF



JORNADA LÚDICA EN SALAMANCA. El campo de golf de Villamayor (Salamanca) fue escenario el 31 de mayo del campeonato organizado por el ICAVA, que finalizó de nuevo con Alberto López Soto como ganador, si bien todos los participantes fueron obsequiados con numerosos premios y regalos.

LEGUA LEGAL

EL PINAR COMO META.

El pinar de Antequera fue la meta final de la Legua Legal que se corrió el pasado 10 de mayo, de la que se proclamaron campeones Raúl Díez y Begoña Sánchez. Lo mejor: el aperitivo posterior para reponer fuerzas.



PÁDEL



CAMPEONATO ENTRE AMIGOS. De nuevo, el *fanátic* de pádel celebrado en las instalaciones de La Vega, el 4 de mayo, reunió a compañeros aficionados a la pala y a la competición sana entre amigos, finalizando con el ya clásico vino para comentar las mejores jugadas.

PROCESIÓN SEMANA SANTA



ACTO PENITENCIAL. La lluvia impidió que saliera la tradicional procesión de Penitencia y Caridad, con la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, y en la que participan miembros del ICAVA. En su lugar, hubo un acto de oración en la iglesia de San Martín, uniéndose en esta ocasión el presidente de la Audiencia Provincial y magistrados de Barcelona.

JORNADAS CATAS AGRUPACIÓN ABOGACÍA JOVEN



APRENDIENDO DE VINOS. Los días 23 y 30 de mayo, la Agrupación de la Abogacía Joven celebró sus tradicionales cursos de cata. En ellos, los asistentes pudieron degustar vinos de la Bodega Herrero y Comenge, en el restaurante Mesa Cero.

FIESTA DE LA PRIMAVERA



PREÁMBULO DEL VERANO. Las instalaciones del Restaurante del C.D. Real Sociedad Hípica de Valladolid fueron este año las elegidas para la celebración de la fiesta de la primavera, a la que el tiempo acompañó, pese a una ligera lluvia de bienvenida. Bajo las carpas instaladas al efecto, los asistentes —entre los que se encontraban también alumnos del Máster de la Abogacía— disfrutaron hasta bien entrada la noche de cena cóctel, bebidas y baile amenizado por DJ. Durante la noche se entregaron los premios correspondientes a las competiciones deportivas de la Legua Legal y el fanático de pádel.



PLAN AHORRO FLEXIBLE

Con más ventajas que nunca



INDICADOR DE RIESGO

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo

↑ **3,30%** ~~3,25%~~ rentabilidad a
cuenta anterior

Rentabilidad a cuenta trimestre actual¹

4,29% rentabilidad media últimos 10 años

⊕ **0,15%**

**Siempre que mantengas tu saldo
acumulado hasta fin de año**

Bonificación aplicada sobre las
aportaciones extraordinarias
realizadas del 1/3 al 1/7 de 2024.
Ver bases de la promoción.



**Ausencia
de penalizaciones**

Recupera tu dinero
cuando lo necesites

Todo lo que aportes a tu Plan Ahorro Flexible entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2024, podrás rescatarlo sin penalización alguna durante los 3 primeros años². Ver bases de la promoción.

Ver bases de la promoción en www.mutualidad.com

*Sistema SVA incluido en el Plan Universal de la Abogacía

1. Rentabilidad a cierre de 2023: 3,83%, pendiente de aprobación por parte de la Asamblea General 2024. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

2. Las aportaciones realizadas a partir del 31 de julio de 2024, podrán ser rescatadas con las condiciones habituales: el primer año solo se podrá sacar lo aportado, sin rentabilidad. A partir del segundo año se cobrará un 2,5%, y del segundo al tercero un 1%. A partir de la finalización del tercer año desde la contratación inicial del Plan de Ahorro Flexible, el valor de rescate será el fondo acumulado sin ninguna penalización.